

# ¡NO AL GOLPE!

TEMA DEL MES

- **Defender a Bolivia es defendernos a todos** / ARMANDO BARTRA • **En el vórtice de la historia** / MILTON GABRIEL HERNÁNDEZ • **La mirada estratégica del movimiento indígena ecuatoriano** / JUAN CUVI • **Ecos de la revuelta indígena popular y el parlamento social** / FRANCISCO HIDALGO FLOR •

Estrategias productivas comunitarias,  
**PARA LA DEFENSA DEL TERRITORIO**

ADEMÁS

COEDITOR DE ESTE NÚMERO: CONSEJO CIVIL MEXICANO PARA LA SILVICULTURA SOSTENIBLE

## EDITORIAL

# México 2018 y el inicio de la segunda oleada emancipatoria de Nuestra América

Para Álvaro, que ya llegó

**N**uestra América va. Si en el tránsito del siglo XX al XXI los movimientos sociales contestatarios y los triunfos electorales de las izquierdas, daban el banderazo de salida a la primera oleada del curso emancipatorio latinoamericano, tres lustros más tarde otras insurgencias populares y otros éxitos electorales anuncian el inicio de una segunda oleada libertaria. Si en 1998 el despegue simbólico fue la elección de Hugo Chávez, en 2018 ha sido la de López Obrador.

Y Nuestra América va. En México, el arrollador triunfo electoral de Morena; en Argentina la contundente derrota en las urnas del neoliberal Mauricio Macri a manos de Alberto Fernández y Cristina Fernández; en la diferencia de más de diez puntos con que el progresista Daniel Martínez aventaja al conservador Luis Lacalle, con quien se medirá en segunda vuelta en Uruguay; en Colombia el golpe al uribismo y al presidente Duque que representan los triunfos de la izquierda en los comicios seccionales, incluyendo Medellín y la capital Bogotá.

Extendidos avances electorales a los que se suma en Venezuela el fracaso del imperio y la derecha en su intento de golpe de Estado contra Nicolás Maduro; en Brasil el creciente descrédito del neofascista Jair Bolsonaro, pero sobre todo las multitudinarias insurgencias con que los pueblos de Chile y Ecuador se confrontan con el neoliberalismo de Sebastián Piñera y Lenin Moreno, y las airadas protestas de los nicaragüenses contra el autoritarismo represivo de Daniel Ortega.

Sin olvidar la "marea verde": las movilizaciones y debates con que las mujeres del subcontinente están defendiendo sus derechos y en particular el de abortos legales, seguros y gratuitos. Inédita insurgencia que augura que ésta segunda oleada emancipatoria tendrá rostro de mujer.

Y para que el regreso de los pueblos estuviera completo, el 8 de noviembre, después de 19 meses preso, Lula recuperó la libertad.

Sin embargo, dos días después, el golpe de Estado en Bolivia -donde Evo ganó en primera vuelta, aunque ante las dudas había aceptado reponer la votación- es un doloroso retroceso para los bolivianos y un sacudón para el progresismo. Pero, junto con la frustrada intentona venezolana de Guaidó, el golpe del fascista Camacho debe verse también como un intento de cambiar las reglas de juego, clausurando de una vez por todas la lid democrática como escenario válido para dirimir los diferentes proyectos sociales. Intentona que está cambiando los alineamientos, pues si antes la confrontación era entre progresismo y conservadurismo hoy

debe ser también entre golpistas y demócratas. Y me queda claro que los pacíficos somos más que los violentos. Los que queremos la fiesta en paz conformamos una abrumadora mayoría, ciertamente cruzada por posturas discrepantes que, sin embargo, podemos resolver pacíficamente. La izquierda del nuevo milenio que le apostó a la combinación de movilizaciones sociales y triunfos electorales está avanzando, véase sino el caso de México y Argentina. No a la barbarie, aislemos al golpismo.

Durante dos décadas Nuestra América ha sido laboratorio del buen cambio social. Mientras que en Europa y Estados Unidos el hartazgo provocado por el neoliberalismo alimentaba nacionalismos supremacistas, proteccionismos de gran potencia y avances políticos de la ultraderecha... que en el fondo no contravenían el paradigma neoliberal; entre nosotros el descontento de los pueblos maltratados por el capitalismo canalla del último tercio del siglo XX se orientó hacia la izquierda en busca de salidas democráticas, justicieras y libertarias al mercantilismo absoluto.

Lance inédito en el que algo se logró, pues donde había gobiernos llamados "progresistas" se recuperaba la soberanía, se desobedecían las instrucciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se reducía dramáticamente la pobreza y en algunos casos como Venezuela, Bolivia y Ecuador se refundaban las instituciones, entre ellas la Constitución.

Es verdad que con la recesión global de 2008 y el fin de la bonanza económica que hizo posibles las que he llamado "revoluciones del bienestar", cayeron Brasil y Argentina, entró en crisis Venezuela, se desvió Ecuador y ahora cae a la mala Bolivia. Pero



Cultura viva. Danielle Pereira



Protestas en Chile.

después del cortísimo invierno neoliberal, en Nuestra América las izquierdas están de regreso, mientras que los europeos siguen lidiando con el neo nazismo y el *brexit*, y en Estados Unidos soportan las patanerías de Trump.

El arco emancipatorio nuestroamericano es un curso prolongado en que se busca primero limar los filos del capitalismo crudo y desmecatado al que llamamos neoliberal, pero en la perspectiva de ir desmontando progresivamente los engranajes del propio capitalismo; sistema del cual el rentismo especulativo y predator de las pasadas décadas no es más que una modalidad histórica excepcionalmente virulenta.

Contra la idea de que la globalización, las transnacionales y los organismos multilaterales dejaban sin materia a los estados-nación y por tanto a la política y los partidos que luchan por acceder al gobierno, en Nuestra América el nuevo milenio arrancó con enérgicos movimientos que propiciaron los triunfos electorales, después de los cuales se fueron diluyendo y dejando paso al protagonismo de los gobiernos reformadores que ellos mismos habían encumbrado. "Ya los pusimos ahí, pues ahora hagan lo que tienen que hacer", era el discurso implícito.

Reflujo de los movimientos, al que acompañó la marginación o descomposición de casi todos los partidos de izquierda: en Brasil las corruptelas minan al Partido de los Trabajadores; en Bolivia el Movimiento al Socialismo se ahueca; en Ecuador Alianza País se derechaiza; en Argentina el peronismo de izquierda se desdibuja... Los retrocesos de la izquierda en Brasil, Argentina, Ecuador y Bolivia tienen su origen en el fin del ciclo económico global favorable y en la ofensiva del imperio y las burguesías locales, pero también en la debilidad de los partidos y de los movimientos, que en algunos casos incluso cambian de signo y son utilizados por las derechas.

Fue duro y doloroso, pero después del cortísimo invierno de la restauración neoliberal -un conservadurismo tan sin futuro que apenas instalado en unos cuantos gobiernos comenzó a desfondarse- estamos de regreso. Y volvemos otra vez montados sobre los movimientos.

Al grito de "¡No son 30 pesos, son 30 años!" los chilenos transforman una protes-

ta estudiantil contra el alza de los pasajes en una insurgencia que el 25 de octubre moviliza a un millón doscientos mil personas en todo el país, mientras que el presidente Piñera, que había declarado la guerra y enviado veinte mil soldados a la calle, tiene que ceder y sacrificar a todo su gabinete, sin que por ello amaine el movimiento.

En Ecuador el pueblo se alza contra los acuerdos que el presidente Moreno ha firmado con el Fondo Monetario Internacional; movilización en la que destaca la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, cuyo anticorreoismo la había vuelto morenista, hasta que a principios de este año se distancia del presidente... a quien sin embargo le abre una puerta al sentarse a negociar con él, cuando el movimiento -en parte correísta- comenzaba a pedir su renuncia.

Aunque también la derecha se envalentona. En Bolivia la oligarquía -los "barones de la media luna"- viene de regreso apoyándose en sectores de la clase media a los que disgustan los indios empoderados y, paradójicamente, en grupos ambientalistas y feministas de derechas. El Comité Cívico Cruceño del fascista Camacho y sus semejantes, nunca buscaron enmendar las presuntas fallas de la elección sino derrocar al gobierno.

Aun así, todo indica que dio inicio la segunda oleada del ciclo emancipatorio nuestroamericano. Nueva etapa que en lo económico no tendrá viento de cola -como lo tuvo la primera- sino en contra y con turbulencias, pues lo que algunos llaman estancamiento secular llegó para quedarse; y en lo político, salvo nosotros, el mundo se mueve a la derecha. Por esto y porque ya se emplearon y desgastaron, no podemos repetir en esta fase las fórmulas que se aplicaron en los tres primeros lustros del siglo.

Lo que sí se repite es que, donde persiste el neoliberalismo o donde éste había vuelto, habrá que recoger los platos rotos y limpiar el tiradero. En Argentina salir del entrampamiento con el Fondo Monetario Internacional en que la metió Macri, en México recuperar al Estado como agente del desarrollo erradicando la corrupción y el dispendio que habían hecho de él un "elefante reumático".

→ En un mundo de pobres, la redistribución del ingreso sigue siendo el mandato mayor y la prioridad. Pero recuperar para la nación los recursos naturales -o sus rentas- y palanquear el crecimiento de la economía en la exportación de bienes primarios, ya no es posible ni pertinente; porque es destructiva, porque son recursos escasos y porque temporalmente sus precios cayeron.

Financiar el combate a la pobreza en la puesta en valor de los recursos naturales no es un pecado, pero es insostenible. Y en México, por ejemplo, simplemente imposible porque no somos primario-exportadores ("extractivistas" que dicen algunos) sino principalmente exportadores de manufacturas que incorporan insumos importados, lo que nos hace industrializados pero maquiladores. Nuestra economía se finca en la explotación de mano de obra barata, lo que es injusto y también insostenible cuando Trump se empeña en recuperar empleos.

Reconociendo las diferencias nacionales, la segunda fase del ciclo emancipatorio nustramericano tendrá que buscar nuevos caminos. En lo económico habrá que crecer, porque ciertamente no puede haber redistribución sin crecimiento. Pero una cosa es crecer, como crecen las plantas, los animales y las personas, y otra cosa es la expansión a toda costa propia de la modernidad urbano industrial.

Para empezar, el crecimiento que necesitamos es el de la economía real y productiva que tiene su palanca en el trabajo y no tanto de la rentista que lucra con la disponibilidad de recursos naturales.

Una producción incluyente que vaya erradicando la pobreza no mediante los subsidios sino gracias a la justa retribución del trabajo y la equitativa satisfacción de las necesidades. Inserción productiva de los más, que además es condición de una economía auto centrada que, sin darle la espalda a los mercados globales, también se apoye en el mercado interno.

Una economía atenta a las ventajas comparativas y competitivas, que, sin embargo, priorice los sectores estratégicos: soberanía alimentaria para asegurar que nadie se quede sin comer, soberanía energética que sustente la marcha de nuestra producción y consumo, soberanía laboral que garantice a todos empleos o trabajos dignos y remuneradores.

Una economía respetuosa de las personas y de las cosas. Una producción que en vez de descomponer y polarizar a las comunidades humanas fortalezca la justicia y la cohesión social. Una producción que en vez de erosionar y degradar a los ecosistemas se desarrolle en armonía con la naturaleza. Es decir, una economía social y ambientalmente solidaria...

Un modelo económico que no cancela al mercado ni excluye al capital pero que los acota mediante la acción conjunta de la sociedad y del Estado.

Un nuevo orden que habremos de edificar entre todos y que, después de la solidaridad inmediata y urgente con los agredidos, es el asunto más importante de la agenda nustramericana. •

A. Bartra



Bandera Wiphala.

## Defender a Bolivia es defendernos a todos

Armando Bartra

Para Juan Carlos, donde quiera que esté

**M**ientras que en México lleva un año gobernando la izquierda, en Chile y Ecuador los pueblos se alzan contra el neoliberalismo, en Argentina regresa al poder el progresismo y Lula sale de la cárcel, en Bolivia la burguesía de la "media luna", los conservadores de diverso signo, la policía y el ejército dan un golpe de Estado.

La violencia ejercida por grupos organizados, no para reponer una elección que en primera instancia habían perdido, sino para derrocar al gobierno, fue conducida por una derecha vieja por los intereses de clase que en el fondo representa, pero nueva por la base social en que se apoya, el discurso que difunde, la forma en que se organiza y el modo en que actúa. Su centro y emblema es el Comité Cívico Cruceño, fincado en el Departamento histórico de la oligarquía, su instrumento la paramilitar la Juventud Cruceñista, su cabeza el empresario Fernando Camacho, cuyo discurso histriónico e iracundo combina racismo con evangelismo. Biblia, fuego purificador y linchamientos.

El sector en el que prenden sus consignas es la clase media. Pero como ha establecido el hasta hace unos días vicepresidente García Linera, en Bolivia hay dos clases medias: la vieja y la emergente. Y la que alinea con la derecha es sobre todo la vieja clase media acriollada, que se siente agredida por la figura y los modos del aymara que gobernaba el país, e invadida por la nueva clase media india que ascendió gracias a las políticas de inclusión social. Aunque también los recién llegados al mundo del consumo se afilian a veces al pensamiento de la derecha. Tal sería el caso de ciertas organizaciones estudiantiles.

"Estamos viviendo la rebelión de las clases medias, que se atribuyen la voz del pueblo, como siempre lo hicieron", escribió en este mismo periódico Juan Carlos Pinto.

Y la vía elegida por la derecha política para catalizar a estas capas medias es la

iracunda polarización. De ahí que la importancia que los conservadores daban a la segunda vuelta en las elecciones se debe a que permitiría condensar el antievismo de todos los colores.

Polarización personalizada que buscan ansiosamente todas las derechas latinoamericanas, en tanto que carentes de verdadero proyecto alternativo. Así, se lanzan contra Lula, contra Cristina, contra Correa, contra Obrador... a quienes se sataniza desde los medios de comunicación que la oligarquía controla.

Y es porque también en Bolivia le apuestan a la polarización, que después de la primera votación utilizaron el diferendo sobre los comicios no para llegar a una nueva jornada electoral, sino para radicalizar y violentar el antievismo, dándole barniz de legitimidad al preconcebido golpe militar.

¿Por qué no fueron a la nueva elección que el gobierno había aceptado, si al sumar a todas las oposiciones era posible que la ganaran? Porque lo que busca la oligarquía no es la alternancia electoral sino la aniquilación del proyecto de cambio y el escarmiento de los que lo impulsan y lo respaldan. "¡Nunca más la Pachamama en El Quemado!"

Por el contenido de sus proyectos, en Nuestramérica se confrontan el neoliberalismo y el progresismo posneoliberal; pero por su forma política se confrontan dos vías: la del golpismo y la de la democracia.

Torpes para ganar elecciones justas e incapaces de gobernar con mínima presencia, los nuevos restauradores se van decantando por los golpes duros y la dictadura, que tan buenos servicios les dieron en el pasado. Mientras que las nuevas izquierdas apuestan por acceder al poder combinando movimientos y triunfos electorales y gobernar con las reglas del pluralismo político.

Lo que juega a nuestro favor es que en el nuevo siglo los pueblos del subcontinente han aprendido a reivindicar el empleo de las formas democráticas para resolver los diferendos entre proyectos sociales. El derrocamiento de gobiernos electos y la dictadura ya no son, como en el pasado, parte del sentido común subcontinental.

Hoy el golpismo puede y debe ser aislado. Sin duda tenemos diferencias políticas profundas pero los que estamos por las formas de convivencia civilizadas somos mayoría. Hagámosla valer ¡No al golpismo!

El imperio, la oligarquía y las derechas son las responsables del golpe. El pueblo boliviano, su gobierno democrático, el partido del cambio y las organizaciones sociales son las víctimas. Y estamos con las víctimas; nuestro pensamiento y nuestro corazón están con los perseguidos, acosados y violentados. Pero es también importante reconocer las debilidades de los nuestros, que facilitaron el provisional éxito de la reacción.

Porque a todos nos puede ser provechoso, reproduzco aquí algunos párrafos del libro *¿Qué está cambiando en Bolivia?*, publicado el año pasado por Juan Carlos Pinto Quintanilla, hasta antes del golpe Director General de Fortalecimiento Ciudadano de la Vicepresidencia.

"La conjugación audaz entre [partido] y movimientos que permitió detonar el cambio, se convierte desde la experiencia de ser gobierno, en un dilema político, porque la militancia toma como tarea central el acomodamiento en espacios estatales y no la continuidad del proceso revolucionario [mediante] un proceso de deliberación y construcción de propuestas revolucionarias desde el seno de las organizaciones sociales. p. 58.

"El MAS como identidad política victoriosa se convirtió en freno del desarrollo político de la transformación revolucionaria cuando confundió el horizonte estratégico de transformación con el pueblo movilizado, con la participación personal de los militantes en el Estado y el cumplimiento de las demandas sectoriales [...]. Por eso es comprensible que haya más 'evismo' que 'masismo' [configurándose] un contexto político en que el liderazgo representa la principal potencia, pero también la mayor debilidad. p. 76.

"La organicidad del [partido] ha resultado exitosa y efectiva al momento de movilizarse contra el neoliberalismo y para alcanzar victorias electorales. Sin embargo, este trabajo activista y movilizador sin trabajo de formación política y cuando los mejores cuadros son llamados a tomar responsabilidades en la representación estatal, hace que militantes y simpatizantes lo vean como un simple espacio de ascenso. p. 60

"Por su parte los movimientos sociales que propiciaron el proceso de cambio retornaron a su identidad de organizaciones sociales con demandas y reivindicaciones particulares. El papel protagónico y estratégico otorgado por la Constitución a los movimientos sociales quedó disminuido por la presencia del Estado y el liderazgo, que son los que asumieron la vanguardia en los procesos de transformación. p. 66, 67.

Frente al reflujo de las organizaciones sociales, que se han limitado a ser acompañantes y beneficiarias del proceso, las decisiones fundamentales han pasado a ser atributo estatal, no solo por las características del liderazgo, sino principalmente porque los movimientos sociales con capacidad de propuesta estratégica, han vuelto a ser organizaciones sociales regionales o sectoriales que demandan gremialmente beneficios al Estado. p. 84.

Muchas organizaciones sociales han entrado en una fase de franca desmovilización [...] por otra parte algunas organizaciones han pasado de tener una visión de transformación nacional e integral, es decir revolucionaria, a buscar únicamente reivindicaciones sectoriales y parciales, confrontando las propuestas nacionales del gobierno. p. 56. •

BOLIVIA

# En el vórtice de la historia

Milton Gabriel Hernández García  
Profesor-investigador del INAH

"A la camarada Rebeca, donde quiera que se encuentre, en el corazón de la resistencia"

El golpe de estado en Bolivia no es un hecho fortuito, espontáneo. Se fue cincelando lentamente desde que Evo Morales asumió el poder el 22 de enero de 2006. Desde aquel día, la oligarquía, la ultraderecha más conservadora y los diferentes gobiernos de los Estados Unidos asediaron al gobierno popular emanado del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Evo y por Álvaro García Linares, que se alzó abiertamente contra el imperialismo y contra todo tipo de intervencionismo norteamericano en América Latina, pero que además se alió política y económicamente con los procesos revolucionarios de Cuba y Venezuela. Eso nunca se lo perdonaron al presidente Evo.

Mucho menos le perdonaron que un presidente indígena, que no cuenta con estudios universitarios en Harvard y que tuvo desde siempre el respaldo de los más pobres, de los humildes, de la gente sencilla del campo, de los mineros, de los coccaleros, de los pueblos originarios, hubiese sido capaz de hacer transitar a Bolivia de ser un país empobre-

cido, explotado, analfabeta, a ser una economía en la que el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 4.9% y en la que se redujo la pobreza del 60 al 34%. Todo ello articulado con la nacionalización de los hidrocarburos que los gobiernos anteriores habían entregado al capital extranjero, sobre todo el gas natural. Evo no solo nacionalizó los recursos naturales, también redistribuyó de manera más equitativa los ingresos que el Estado empezó a generar a partir del gas y otros energéticos y con ello financió e implementó una gran cantidad de políticas sociales dirigidas a los sectores más desprotegidos. La esperanza de vida pasó de 65.3 a 70.9 años. La inflación se redujo de 4.91 a 1.51 % y el PIB pasó de 9,524 a 40,288 millones de dólares. Además de ello, creció la industria, se multiplicaron las cooperativas y el salario mínimo aumentó en un 1000%, por lo que el ingreso anual per cápita pasó de 1.120 a 3.130 dólares. A pesar de que el gobierno de Evo no siguió las recetas neoliberales, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó en 2018 que Bolivia es la economía con el mayor crecimiento económico en América Latina a finales de ese año, con una proyección de 3.9%. La cifra de desempleo bajó de 8.1 a 4.2 %.



Un golpe que se fue fraguando. Lidia Iris Rodríguez Rodríguez



Lo que ocurra en Bolivia podría definir el futuro de los procesos de liberación en AL. Lidia Iris Rodríguez Rodríguez

Otro dato sorprendente es que en 2005 Bolivia era el segundo país con mayor nivel de deuda externa, que equivalía al 52% del PIB. Para 2018, se convirtió en el séptimo país menos endeudado de Latinoamérica, reduciendo sus pasivos internacionales al 24%. Todo ello en 14 años.

Pero no solo en el plano de la economía Bolivia se transformó bajo los gobiernos de Evo. Las relaciones étnico-culturales también se modificaron profundamente. Los 36 pueblos originarios que constituyen a la mayoría de la población fueron reconocidos como nacionalidades en el marco de un Estado plurinacional con respeto a la autonomía y libre determinación. En el campo educativo, tres años después de que el MAS asumió el poder, la UNESCO reconoció a Bolivia como un país libre de analfabetismo. Y eso tampoco se lo perdonaron a Evo.

Lo que en estos momentos está en juego no es lo que la Organización de Estados Americanos (OEA) y los medios de comunicación al servicio de la derecha tratan de mostrar como un controvertido proceso electo-

ral. Lo que está en disputa es un proyecto emancipatorio, popular, indígena, que alcanzó grandes conquistas en los pasados catorce años, *versus* los intereses oligárquicos y transnacionales consistentes en apoderarse de la reserva mundial más importante de litio, así como en reactivar las políticas neoliberales que han demostrado su fracaso en países como Chile, Argentina o México. Lo que no se dice en los medios hegemónicos es que el proyecto de liberación del pueblo boliviano encabezado por el MAS pretende ser destruido hasta el último bastión por las diversas facciones de la derecha que, como aves carroñeras, están tratando de tomar el control del gobierno, empezando por las fuerzas armadas como garantes ficticias de legitimidad. Han consumado el golpe de Estado y es evidente que no tienen un plan articulado. Su táctica se reduce por ahora, a reprimir la organización popular que podría contener y revertir el proceso golpista y a construir una narrativa que les garantice mantener el poder mientras logran estructurar una estrategia que empiece a des-

montar uno a uno los pilares de la edificación del gobierno popular del MAS, así como sus símbolos más profundos.

Tal y como se está fraguando el antagonismo entre las fuerzas políticas y los combates en todas las arenas de disputa, sobre todo en las calles, después de este gobierno del MAS, lo que se vislumbra con mayor claridad en el horizonte boliviano es el retorno a la oscuridad de la noche neoliberal, neocolonialista, racista y ultraconservadora. Frente a este desolador futuro inmediato, las organizaciones sindicales, campesinas, gremiales e indígenas, así como las diversas corrientes de izquierda, incluso aquellas que retiraron su apoyo a Evo o se confrontaron con su gobierno por sus "desviaciones o contradicciones", jugarán un papel fundamental en las próximas horas, en los días por venir. Pero también la solidaridad, no solo entre los gobiernos progresistas, sino entre los pueblos hermanos. Lo que ocurra en Bolivia en los próximos días, semanas, meses podría definir el futuro de los procesos de liberación latinoamericana. •

**Bolivia pasó de ser un país empobrecido, explotado, analfabeta, a ser una economía en la que el PIB creció un 4.9% y la pobreza pasó del 60 al 34%. Todo ello articulado con la nacionalización de los hidrocarburos. La esperanza de vida pasó de 65.3 a 70.9 años. La inflación se redujo de 4.91 a 1.51 % y el PIB pasó de 9,524 a 40,288 millones de dólares. Creció la industria, se multiplicaron las cooperativas y el salario mínimo aumentó en un 1000%. A pesar de que el gobierno de Evo no siguió las recetas neoliberales, el FMI concluyó en 2018 que Bolivia es la economía con el mayor crecimiento económico en América Latina.**



**RESISTIR ES MI DERECHO**

## La mirada estratégica del movimiento indígena ecuatoriano

**Juan Cuvi** Ex dirigente del movimiento Alfaro Vive Carajo; miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción

Una consigna ampliamente difundida en las calles llamó la atención de los corresponsales extranjeros que cubrieron el levantamiento indígena de octubre en el Ecuador: Ni Moreno Ni Correa. El desconcierto aumentó la noche del domingo 13, mientras se realizaba el diálogo directo y público con el presidente Moreno: Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), concluyó su intervención denunciando con nombres y apellidos a los funcionarios del gobierno de Correa que durante una década habían reprimido al movimiento indígena. “Jamás podríamos coincidir con quienes nos persiguieron”, resumió.

Con esta aclaración, la dirigencia indígena desmontó el entramado de descalificaciones con que la derecha pretendió minimizar la capacidad política de la Conaie, apelando a la mutilla de que habían sido manipulados e infiltrados. No solo eso: al denunciar una línea de

continuidad entre el anterior y el actual régimen, como parte de un mismo proyecto político, el movimiento indígena evidenció que su confrontación fundamental va más allá de los gobiernos o mandatarios de turno. A partir de la reivindicación de su proyecto plurinacional, definió al viejo Estado nacional como su contradictor estratégico. Una vez más ancló su lucha a una perspectiva histórica que, además, le permitió esquivar las innumerables trampas que le interpuso la coyuntura. En ese sentido, la derogación del Decreto 883 quedó reducida a una mera eventualidad.

¿Cómo entender, en estas condiciones, el desenlace que tuvo el paro nacional? Para hacerlo toca remontarse brevemente al primer levantamiento indígena en 1990. Ese hecho marcó un punto de inflexión definitivo en la sociedad ecuatoriana. Súbitamente, los olvidados de siempre, los excluidos, los invisibilizados, irrumpieron como un actor político central en la vida nacional.

A partir de ese momento, el

movimiento indígena ha transitado por dos carriles simultáneos: el de la movilización y el de la política formal. Con el primero han alternado entre la presión directa y la resistencia activa. Las últimas tres décadas han sido una sucesión interminable de marchas y paralizaciones indígenas.

En el segundo carril, los indígenas han oscilado entre la negociación y la integración al sistema político. Creación de instituciones, aprobación de leyes, acceso a cargos públicos y candidaturas han sido las for-

mas de relacionarse con la política formal.

El primer punto de confluencia de estas dos vías fue la Asamblea Constituyente de 1998, de la cual surgió la declaración del Ecuador como Estado plurinacional. Dos años después, el movimiento indígena, en una confusa alianza con un sector del Ejército, destituyó al presidente Mahud y abrieron las puertas a una apuesta electoral que llevó al poder al coronel Gutiérrez. La alianza, sin embargo, no prosperó; el movimiento Pachakutik, brazo político de la Conaie, rompió con el régimen seis meses después.

Algo que sí quedó claro para el mundo de la política fue el potencial electoral de este nuevo actor. Ha sido esa constatación, precisamente, la que mayores amenazas y enredos ha provocado en la agenda política del movimiento indígena, no solo por el aprovechamiento que muchos sectores mestizos han querido hacer de esa capacidad, sino por

las propias contradicciones internas que los procesos electorales provocan.

También Alianza País se encaramó en las luchas sociales que continuaron luego de la caída de Gutiérrez. El vacío político que se generó fue el escenario más propicio para una salida populista: en 2006 Correa ganó las elecciones en medio de la suspicacia de un movimiento indígena que ya había aprendido a desconfiar de la política convencional. Y las pruebas no se hicieron esperar: a poco de instalada la Asamblea Constituyente de Montecristi, la Conaie marcó distancia con el régimen. ¿La causa? La profundización de un modelo económico alineado con los intereses monopolísticos nacionales y con las transnacionales extractivistas, y de un modelo político que denigraba los derechos colectivos. Esto explica por qué durante el gobierno anterior las movilizaciones indígenas y las luchas de resistencia territorial jamás cesaron.

Lenín Moreno pretendió compensar estas carencias estructurales con medidas que, más que simbólicas, han sido absolutamente insustanciales. Devolverle a la Conaie la casa y la universidad que les arrebató el gobierno de Correa no hace ni mella en la inhumana realidad que viven los pueblos indígenas. Convocarles a un diálogo condicionado por las imposiciones del FMI, como se pretendió hacer en los meses previos al levantamiento de octubre, tampoco enfrenta el problema de fondo. Los pueblos y nacionalidades indígenas siguen sometidos a una marginalidad estructural obscena.

El escenario futuro es tan complejo como incierto. Por ahora, la crisis fiscal que desató el levantamiento será manejada desde el gobierno con parches transitorios. Las élites empresariales no bajarán un ápice los decibeles de su voracidad. El movimiento indígena, por su parte, discute en asambleas populares y hace públicas sus propuestas, junto con el resto de los movimientos sociales. La Conaie ha reafirmado su autonomía, se ha reconciliado con su visión del futuro. Hoy tiene en sus manos un triunfo que tendrá que administrar sabiamente. •

**El escenario futuro es tan complejo como incierto. Por ahora, la crisis fiscal que desató el levantamiento será manejada desde el gobierno con parches transitorios. Las élites empresariales no bajarán un ápice su voracidad. El movimiento indígena discute en asambleas populares y hace públicas sus propuestas. La Conaie ha reafirmado su autonomía, se ha reconciliado con su visión del futuro. Hoy tiene en sus manos un triunfo que tendrá que administrar sabiamente.**



Una diversidad de actores sociales cuestionan los preceptos neoliberales. Conaie

# Ecós de la revuelta indígena popular y el parlamento social

Francisco Hidalgo Flor

**A** un mes de la revuelta indígena-popular que logró derogar la eliminación del subsidio estatal al precio de los combustibles -parte sustancial de los acuerdos del gobierno de Lenin Moreno con el Fondo Monetario Internacional-, la sensación es el cambio radical en el escenario político y social del Ecuador.

De un contexto gris en el cual predominaban las voces que promovían el retorno neoliberal, característica esencial del régimen de Moreno, hoy emerge un escenario multicolor y vivo de la diversidad de actores sociales y políticos que ponen en cuestión los preceptos neoliberales: achicamiento del estado y apertura al capital extranjero por la vía extractivista.

El movimiento indígena, con la Conaie a la cabeza, surge como actor social fundamental, a la par que cobran protagonismo los movimientos barriales, ecologistas y de mujeres que tomaron parte en el levantamiento y presentan diversas demandas sociales.

Los portavoces de la derecha y el neoliberalismo han perdido legitimidad y sus postulados quedan reducidos a los espacios propios de sus clases y gremios, pero no logran adhesiones en el campo popular. Es muy importante la coincidencia histórica, el surgimiento casi simultáneo de las revueltas populares en Ecuador y en Chile, con movilizaciones y protestas multitudinarias. Eso permite leer a ambos como un proceso regional que cuestiona al modelo neoliberal y sus ejecutores: el FMI y los gobiernos derechistas.

Por otro lado, es trascendente dar cuenta de las evoluciones en las negociaciones entre el gobierno de Lenin Moreno y la

Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador.

Hace unas semanas, la Conaie convocó a la estructuración de un "Parlamento de los Pueblos, Organizaciones y Colectivos Sociales" el cual llegó a agrupar a cerca de 180 organizaciones sociales que discutió y aprobó el documento "Propuesta alternativa al modelo económico y social", el cual fue presentado el 31 de octubre a las entidades de intermediación en la negociación con el gobierno, esto son los representantes de Naciones Unidas y de la Conferencia Episcopal, y entregado a los representantes gubernamentales.

La estructuración de un Parlamento popular diverso es un paso positivo clave pues abre el escenario de representación directa no solo al movimiento indígena, sino que además logra articular un espectro amplio de organizaciones y ciudadanía.

A la par, se da la presentación de una propuesta que coloca al centro un modelo económico-social alternativo, en oposición al modelo neoliberal, que sostiene la recuperación de la economía social y solidaria, y una serie de medidas tributarias para grandes empresas y transnacionales,

y que lleva a que el debate no se reduzca a resoluciones coyunturales.

El presidente Lenin Moreno ha respondido inicialmente con un conjunto de medidas estrictamente en el ámbito agrícola, pecuario y de instituciones educativas, bajo la estrategia de una propuesta economicista, de corto plazo y bajo el esquema de focalización de las políticas sociales

La magnitud masiva y fuerte que alcanzó la revuelta y la legitimidad que tuvo y eventos como la transmisión en directo por medios de la primera sesión de la negociación, dan la iniciativa al movimiento indígena y popular.

Esto genera una enorme preocupación no solo en el régimen morenista, sino en las clases dominantes, las cuales responden con diciendo que se trata de un intento de golpe de estado y de calificar la situación como "insurrección frente al estado". El ministro de Defensa ha anunciado la elaboración de instructivos ubicando medidas y dispositivos ante una amenaza insurreccional.

La situación es compleja, no puede ser reducida a una perspectiva coyuntural, es principalmente una perspectiva de largo alcance: un bloque social que se opone al neoliberalismo y que tiene en el movimiento indígena un pilar fundamental. •

**Hay una enorme preocupación no solo en el régimen morenista, sino en las clases dominantes, las cuales argumentan que se trata de un intento de golpe de estado y tratan de calificar la situación como "insurrección frente al estado".**

**La Jornada del campo**

Suplemento informativo de La Jornada

16 noviembre de 2019  
Número 146 • Año XII

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra  
Coordinador

Cecilia Navarro  
lajornadadelcampo.edicion@gmail.com  
Subcoordinadora

Enrique Pérez S.  
Hernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Yolanda Massieu Trigo, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo y Antonio Turrent.

Publicidad  
jornadadelcampo@gmail.com

Diseño Hernán García Crespo **CAJA**  
TIPOGRÁFICA

*La Jornada del Campo*, suplemento mensual de *La Jornada*, editado por Demos, Desarrollo de Medios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, Ciudad de México. Tel: 9183-0300. Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV; avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, Ciudad de México. Tel: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título *La Jornada del Campo* número 04-2008-121817381700-107.

[twitter.com/jornadadelcampo](https://twitter.com/jornadadelcampo)  
[facebook.com/La Jornada del Campo](https://facebook.com/LaJornadaDelCampo)  
[issuu.com/la\\_jornada\\_del\\_campo](https://issuu.com/la_jornada_del_campo)

OPINIONES, COMENTARIOS Y DUDAS  
jornadadelcampo@gmail.com



Portada: *La Jornada del Campo*

# La defensa del maíz desde el territorio: moviendo al elefante

**Alfredo Álvarez Ramírez** Maestro en Desarrollo Rural por la UAM-X, Integrante fundador del Frente en Defensa del Maíz, activista. @alfred\_alva

El pasado 24 de septiembre el Senado de la República aprobó en el pleno, el dictamen que expide la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), impulsada por las senadoras Ana Lilia Rivera y Jesusa Rodríguez, el cual reconoce la producción, comercialización, diversificación y consumo como un símbolo de identidad cultural nacional. Hasta ese día, el proceso jurídico de defensa y protección de nuestro maíz avanzaba bien, incluso se formalizó al 29 de septiembre como una fecha de fiesta nacional en honor al maíz.

Dicho dictamen, tal como marcan los procesos legislativos, fue enviado a la Cámara de Diputados, en específico a la Comisión Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, cuyo presidente, el diputado Eraclio Rodríguez, no convocó en tiempo y forma a reunión para la discusión y aprobación en sus términos del dictamen de dicha ley.

Tras dos convocatorias fallidas por falta de quórum, se citó a reunión para el miér-

coles 6 de noviembre. El tema de la ley estaba en la orden del día y parecía que los consensos estaban dados para su aprobación en sus términos.

Sin embargo, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) inició una intensa campaña mediática basada en mentiras, bots y opinólogos al servicio de la agroindustria. El lunes 4 de noviembre apareció en la prensa un artículo firmado por Carlos Mota, intitulado *Kilo de tortilla a \$60, si aprueban ley*. Y, en redes sociales, tal como lo señaló la Campaña Nacional Sin maíz no hay País, aparecieron cientos de cuentas bots haciendo eco a esta difamación.

Aunado a la mentira inverosímil de que la tortilla subiría hasta 60 pesos en caso de aprobarse la LFFPMN, el CNA prosiguió con lo siguiente: "prohíbe los híbridos", "aumentarán las importaciones de maíz", "se frenará la investigación biotecnológica en México", entre otras cosas.

Ahora la iniciativa de ley se encuentra en jaque legislativo: por un lado, la agroindustria impuso su lucha por preservar sus intereses e intenciones de privatizar nuestras semillas y, por el otro, hay legisladores que no tienen voluntad para hacer realidad la protección y el fomento de nuestro maíz nativo.

## Protección y defensa del maíz nativo desde los territorios

A nivel local, desde nuestro territorio, Colima, hemos defendido las 11 variedades de maíz nativo que, de acuerdo con la Conabio, existen en nuestra entidad, ello no es menor, en términos porcentuales hablamos del 17% de las 64 que se tienen identificadas en el país. Así, desde el pasado 4 de agosto del presente año somos la tercera entidad en contar con una Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como patrimonio alimentario del Estado de Colima (LFFPMN). Dicho logro es fruto de la suma de voluntades para un fin común, la defensa de nuestras semillas ancestrales.

Recordemos que México es centro de origen del maíz. A lo largo de más de 10,000 años, nuestros ancestros domesticaron el cultivo, el cual consideraban sagrado. En palabras de Guillermo Bonfil, hablar de maíz es mucho más que entender al maíz como un grano. La cultura del maíz se encuentra arraigada en nuestra memoria colectiva. No por nada en el Popol Vuh de los mayas se lee que somos hijos e hijas del maíz. En síntesis, el maíz es un símbolo colectivo y cultural que logra unificarnos como pueblo en su defensa. En ese sentido, me permito compartir la experiencia que hemos tenido con nuestro colectivo.

## Un colectivo en defensa del maíz nativo y su cultura

Para lograr la protección jurídica en Colima, como Frente en Defensa del Maíz, nos movilizamos y organizamos para hacer una campaña de información con el objetivo de recabar firmas en apoyo a la LFFPMN; para ello, aprovechamos la coyuntura

de la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México para instalarnos junto a los módulos con nuestra propia mesa y recabar firmas. De manera voluntaria y autogestiva logramos reunir cerca de mil firmas, gracias al esfuerzo y voluntad de cada integrante del Frente.

La iniciativa de Ley fue presentada por el Frente en Defensa del Maíz el pasado 6 de diciembre del 2018 ante el Congreso del Estado de Colima. Ahí los diputados locales de la bancada de Morena salieron a escuchar y a dar seguimiento a la iniciativa planteada por el movimiento. El proceso legislativo de la LFFPMN continuó su curso, en varias ocasiones acudimos a defenderla ante otras instancias interesadas, como el propio INIFAP, que al final dio su respaldo. Por su parte, con quien se tuvo una mayor fricción fue con el gobierno del estado, en especial con la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Ante esta lucha de fuerzas, estar presente en las mesas de trabajo fue crucial para argumentar y defender la LFFPMN.

Finalmente, la Ley se aprobó en el Congreso del Estado el 5 de julio del 2019 por unanimidad. Quiero resaltar el apoyo y la importancia de que gente formada en los movimientos esté hoy en alguno de los poderes, como por ejemplo el diputado local Vladimir Parra, quien impulsó y tomo como suya dicha iniciativa. Lo anterior lo menciono debido a que en enero del 2014 se había

presentado una iniciativa de Ley similar y en ese entonces los diputados la rechazaron. Ejemplo concreto de cómo la correlación de fuerzas es importante y de lo significativo e importante de los movimientos para generar cuadros que se formen en las calles.

Con dicha aprobación de la Ley, el maíz pasa a ser patrimonio alimentario de la entidad, además de que se protegerán y consumirán las variedades de maíz nativo del Estado, mediante la creación de un Consejo Consultivo que tendrá carácter de vinculante con la Sader. Además, se fomentarán y apoyarán "Casas de Semillas" ejidales, comunales o hasta municipales, lo que es un gran paso hacia la búsqueda de la soberanía alimentaria en nuestra entidad.

Es muy importante señalar que, en Tlaxcala, Michoacán, Morelos y Colima ya existen leyes de fomento y protección del maíz nativo.

Ante las mentiras lanzadas por diversos intereses transnacionales que intentan controlar nuestras semillas, creemos importante dar a conocer la experiencia, la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo no encarecerá el precio de nuestro alimento sagrado, por el contrario, busca garantizar el acceso a esas variedades deliciosas y sobre todo nutricionales para todas y todos. Desde Colima mandamos nuestro apoyo y respaldo a las senadoras Ana Lilia Rivera, Jesusa Rodríguez, a la camarada Adelita San Vicente, a Elena Álvarez-Bullya, a Víctor Suarez, Julieta Ponce, Malin Jönsson, Julia Álvarez-Icaza y Enrique Pérez, a la campaña Nacional Sin Maíz no hay país y a la Demanda Colectiva, por ser ejemplo de unidad por nuestra gran comunidad que es México.

Sembrando comunidad, cosechamos bienestar.

Otro México ya es posible. •

## ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE SE APRUEBE ESTA INICIATIVA DE LEY?

1. Es una ley preponderantemente declarativa (no regulatoria); genera derechos culturales y de alimentación a través de declarar el maíz nativo un derecho humano del pueblo mexicano.

2. La iniciativa busca garantizar y fomentar, a través de las autoridades competentes, que todas las personas tengan acceso efectivo al consumo informado de maíz nativo y en diversificación constante, así como de sus productos derivados.

3. Es necesario que esto suceda antes de que entre en vigor el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que correríamos el riesgo de no poder proteger nuestras semillas; por eso es indispensable su pronta aprobación para que el maíz y su riqueza queden protegidos.

4. No implica que quieran quitarse o retirarse del mercado los maíces híbridos, ni que esto sea un retroceso para el país.

5. La Iniciativa No es restrictiva de los OGM ni de la biotecnología moderna, o de su investigación; esa materia se encuentra regulada en la Ley de Bioseguridad de los OGM.

## ¿Ley de maíz podría aumentar el precio de la tortilla?

La Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo establece que el maíz nativo es patrimonio de México, a fin de evitar que las empresas transnacionales se lo apropien.

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) criticó la ley y señaló que habrá prohibición del uso de maíces híbridos, lo que generará una escasez y el aumento de las importaciones.

Además, aseveró que el precio de la tortilla podría elevarse hasta \$60 el kilo.

El colectivo Sin Maíz no hay País aseguró que esto es una campaña de la industria agroalimentaria debido a que:

La ley no prohíbe otro tipo de técnicas de mejoramiento como las semillas híbridas, sino busca que el Estado garantice que todos tengan acceso al consumo informado.

La ley no regula la comercialización del maíz: no veta del mercado los maíces híbridos.

Establece medidas de protección para la producción del maíz nativo y las técnicas tradicionales, pero no rechaza otros tipos.

La ley es declarativa y busca que el maíz nativo sea un derecho humano del pueblo mexicano.

## PRESENTACIÓN

# Para defender el territorio hay que trabajarlo

Salvador Anta Fonseca CCMSS

El pasado 30 de octubre de este año, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible A.C. organizó el foro “Estrategias productivas comunitarias para la defensa del territorio”, que tuvo como objetivo analizar y revisar algunas estrategias que comunidades y organizaciones sociales de productores han desarrollado para defender su territorio de diversas amenazas, entre ellas los proyectos extractivistas mineros, los parques de energía eólica, las plantaciones agroindustriales que hacen uso excesivo de agroquímicos y la tala clandestina, entre otros.

En el foro se presentó información de estudios que señalan que en años recientes se ha beneficiado la economía de los grandes propietarios y de la iniciativa privada, a través del debilitamiento de los ejidos, comunidades y organizaciones de pequeños productores y de diversos cambios en la legislación nacional. Agradecemos a **La jornada del campo**, que nos abrió espacio para compartir algunas de las participaciones que se dieron en el foro.

Entre los textos que se incluyen en este número están dos experiencias de comunidades forestales: la de la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas-Chinantecas (UZACHI), Oax. y la de la Comunidad de Cherán, Mich.

En el primer caso se trata de una organización integrada por cuatro comunidades que después de luchar hace 35 años para evitar que se renovara la concesión de sus bosques a la empresa paraestatal Fábricas de Papel Tuxtepec (FAPATUX), actualmente han logrado apropiarse del proceso productivo y manejo forestal que le permite generar empleo e ingresos para sus comuneros, así como establecer diversas empresas forestales comunitarias que han logrado diversificar el uso de sus recursos forestales: aserraderos, empresas de ecoturismo, plan-

tas embotelladoras de agua de manantial, producción de carbón de encino, juguetes de madera, carpinterías, entre otras.

En el caso de Cherán, Mich., se resaltó la experiencia de una comunidad que después de muchos años de estar afectada por la tala clandestina por algunos vecinos y el crimen organizado, decidió organizarse e impedir que se siguiera extrayendo madera de manera ilegal. Actualmente una de sus principales actividades es la restauración y reforestación de sus bosques, así como la promoción del aprovechamiento de resina de pino.

Además de estas comunidades, se presentaron los casos de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske, de la Sierra Norte de Puebla; la Cooperativa U Lol Ché, de Quintana Roo; y del Sistema Comunitario para la Conservación de la Biodiversidad (SICOBI) de la Sierra Sur de Oaxaca.

La experiencia de la Tosepan es un caso ejemplar: su lucha inicial fue para enfrentar a los acaparadores de diversos productos de abasto doméstico y del café, y lograron a través de su organización en cooperativas, acopiar el café de sus socios, manejarlo bajo prácticas orgánicas y venderlo en mercados internacionales de café orgánico y de comercio justo, que les dan mejores ingresos. Además del café, ahora comercializan miel, canela, y pimienta. Cuentan con un centro de capacitación para el desarrollo de sus socios, caja de ahorros, tiendas de abasto, tienda de artesanías, y un programa de vivienda sustentable para alcanzar la meta del “vivir bien”. La Tosepan ha logrado incidir en el desarrollo de Programas de Ordenamiento Ecológico participativo, que han generado legislación local que impide el establecimiento de la minería, plantas hidroeléctricas, o fracking en sus territorios.

La Cooperativa U Lol Ché, de productores de miel, expuso la situación que sufrieron sus

apiarios, por el uso de un insecticida por parte de un vecino, lo que provocó la muerte masiva de sus abejas. Ello los obligó a emprender una demanda ante las autoridades ambientales y a buscar que se les indemnizara, lo cual lograron tras hacer la denuncia en los medios de comunicación. Actualmente, la Cooperativa está incursionando en los mercados orgánicos de miel y busca ampliar los beneficios para sus miembros, a la vez que protegen las selvas secundarias de su región.

Adicionalmente, se presentó la experiencia de la Fundación Yansa que trabaja con comunidades del Istmo de Tehuantepec, Oax. y Yucatán, en el desarrollo de pequeños proyectos de energía alternativa comunitaria: eólica y solar, en contraposición con los grandes parques eólicos y solares de la iniciativa privada que dejan graves impactos en los territorios.

Por su parte, la antropóloga Giovanna Gasparello reflexionó sobre la relación entre las comunidades y los territorios, una relación espiritual, cultural, laboral e inseparable de la vida misma. También se refirió a las consecuencias aún no previstas de que los hijos de los campesinos estén abandonando sus tierras y de los procesos de despojo que se están viviendo en toda la geografía nacional.

Al final del Foro, se conminó a que se establezcan alianzas entre estas experiencias y otras más, para generar un frente de defensa del territorio más sólido y amplio. Es indispensable visibilizar que la mejor forma de generar desarrollo local, bienestar para la gente y al mismo tiempo conservar los recursos es impulsar esas estrategias productivas sustentables que comunidades y pueblos llevan a cabo.

Desde el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible estamos comprometidos con visibilizar y vincular estos esfuerzos, hoy por hoy la mejor apuesta para revertir la desruralización que está viviendo nuestro país.



Trabajando el territorio. UZACHI

## Cherán, la Montaña y Los Altos: Las respuestas comunitarias a megaproyectos

Giovanna Gasparello Dirección de Etnología y Antropología Social, INAH

Este texto plantea algunas experiencias de organización comunitaria e indígenas en las cuales la defensa del territorio y la construcción de territorialidad representan elementos clave en la resistencia contra las múltiples dimensiones de la violencia y para el fortalecimiento de proyectos civilizatorios más respetuosos de la vida y de la dignidad.

### Los territorios indígenas y campesinos: dimensión cultural y productiva

Actualmente, el discurso político de las organizaciones de base y las reflexiones académicas refieren casi exclusivamente procesos –de afectación y de defensa– que giran alrededor del territorio, entendido como derecho y entidad concreta, arena de la disputa entre intereses y racionalidades contrastantes. La reivindicación por la tierra, eje de

las luchas campesinas y los procesos de organización alrededor de instancias colectivas de producción hasta los años noventa, se extendió a ámbitos distintos y, en la lucha por el territorio, incorporó las dimensiones culturales, rituales e históricas. El énfasis en la identidad y la diversidad impulsó un nuevo giro en las demandas del mundo rural, que coincidió con la drástica reducción de los subsidios al campo, la acelerada transformación cultural y de hábitos cotidianos impuesta por la globalización, y el incremento de los procesos migratorios y de urbanización. Este giro introduce dimensiones como la cultura y la historia, permitiendo la interacción y la convergencia entre sujetos distintos, como las colectividades urbanas o semiurbanas.

El territorio es una entidad espacial conformada por la cultura y la historia; incluye los aspectos culturales y simbólicos, →

→ implicaciones políticas, relaciones de poder y potencialidades productivas y reproductivas. La disciplina antropológica ha estudiado ampliamente la relación entre territorio y cultura (Giménez, 2000) y el “uso de los recursos naturales según patrones culturales” en el *territorio biocultural* (Boege, 2008). Por *territorio* entiendo el lugar “donde arraiga una identidad en la que se enlaza lo real, lo imaginario y lo simbólico” (Leff, 2001: ix); la cultura se apropia de la tierra, significándola, y coevoluciona con la naturaleza definiendo la identidad colectiva e individual de quienes habitan el territorio.

La significación cultural del territorio se hace evidente en la organización de las actividades productivas tradicionales o ciclo agrícola, ordenado por momentos rituales y festivos en los que se reafirma el vínculo estrecho entre los hombres y el territorio. La dimensión cultural determina modos y medios de la apropiación productiva de la tierra (por el contrario, los monocultivos y las agroindustria operan en el sentido de la destrucción de significados territoriales).

#### Amenazas a los territorios

La explotación indiscriminada de los recursos naturales ha puesto en riesgo la integridad de los territorios, y la sobrevivencia de las culturas y pueblos. El “capitalismo de rapiña”, basado en el saqueo de los recursos naturales es la manifestación evidente del proceso definido por Harvey (2004) como acumulación por despojo.

Observamos un incremento exponencial de la presión sobre los territorios indígenas y campesinos por emprendimientos extractivos, de infraestructura, turísticos, energéticos e industriales. La ampliación de los monocultivos, el despojo de tierras de propiedad social y pequeña propiedad para la agroindustria,

la privatización del agua y el uso de agroquímicos. La minería a cielo abierto va de la mano con el desarrollo de enormes parques generadores de energía “verde”. Las actividades extractivas no convencionales como el fracking suman sus efectos devastadores a actividades de “larga tradición” como la extracción petrolera y la tala. Grandes obras de infraestructura se suman a represas y gasoductos, fragmentando los territorios rurales y las áreas naturales y haciendo inviable las formas primarias de aprovechamiento territorial: habitar y alimentarse.

Estas manifestaciones de despojo de medios de vida acompañan la privación de los modos de vida, pues la transformación territorial y el desplazamiento hacen inviable mantener la organización tradicional. El crecimiento urbano de pequeños pueblos rurales y la migración imparable hacia las ciudades de los jóvenes hijos de campesinos son procesos muy delicados cuyas consecuencias en el mundo rural apenas se están observando: crean “espacios vacíos” que son rápidamente apropiados por los emprendimientos industriales.

Mientras el territorio sea un espacio de producción y reproducción natural, económica, cultural y organizativa, quienes lo habitan no permitirán que sea transformado en una *zona de sacrificio* o “territorio socialmente vaciable” (Svampa, 2011, 203), funcional a intereses privados mediante la eliminación de la población y sus formas y modos de vida previos.

Un territorio pierde el significado identitario y deja de ser percibido como elemento que produce identidad y futuro cuando se rompe la relación entre hombres y naturaleza (desaparición de actividades agrícolas e implementación de otras formas de subsistencia, como los



El vivero de la comunidad de Cherán produce 2.5 millones de plantas al año, fundamentales para la restauración de su territorio. Enrique Abe

programas asistenciales, y de aprovechamiento territorial, el pago por servicios ambientales o monocultivos para exportación), o bien cuando se imponen en el territorio condiciones que no permiten la vida individual y colectiva (contaminación, violencia).

Una dimensión contundente del despojo actúa en el ámbito de la cultura, la memoria y la organización; el rechazo hacia el modo de vida campesino y la homogeneización en los consumos redundan en una erosión o despojo cultural, condición previa a otras formas de despojo y denigración del trabajo del campo.

Las manifestaciones del despojo se basan en la dimensión estructural de la violencia: violencia estatal que legitima el despojo para proyectos extractivos y de infraestructura, incremento de la participación de organizaciones criminales en actividades extractivas ilegales; despojo y acaparamiento de tierra para

cultivos agroindustriales como el aguacate y el contubernio con empresas extractivas, como las mineras.

#### Respuestas comunitarias

En tal contexto, observamos una multiplicidad de experiencias colectivas que enfrentan las violencias y el despojo, y fortalecen alternativas de vida en sus territorios. Aquí algunos casos, enfatizando la importancia de las actividades agrícolas para la reproducción cultural de los pueblos: la reconstitución del territorio en Cherán; la lucha contra la explotación minera en la Montaña de Guerrero; el cuidado de la madre tierra y la buena vida en la Zona Norte de Chiapas.

#### Cherán

La comunidad purépecha de Cherán adquirió notoriedad a partir del 2011, cuando un levantamiento popular logró detener, paulatinamente, expulsar de su territorio al grupo criminal responsable de la indiscriminada tala ilegal de sus bosques comunales, de extorsiones, desapariciones y asesinatos. La investigación realizada en 2016 puso en evidencia un complejo entramado de conflictos y una cadena de despojos que llevaron al estallido. La tala criminal de los bosques tiene como antecedente cuatro décadas de tala clandestina a pequeña y mediana escala, favorecida por la corrupción de las autoridades, y ocasionada por la pobreza y marginación de la población indígena. Históricamente, los cheranenses han vivido de la agricultura (siembra de cereales), la ganadería y el aprovechamiento del bosque (resinación, recolección de hongos y corte de árboles maderables). Diversos factores explican la progresiva pérdida de arraigo territorial y la disminución de las actividades agrícolas.

La migración a Estados Unidos, iniciada hace casi un siglo,

ha alcanzado una magnitud tal que casi la tercera parte de la población de Cherán vive “al otro lado”. Esto ha transformado los modos de vida en la comunidad. Más del 20% de los ingresos de la población de Cherán proviene de las remesas, por lo cual mujeres y adultos mayores, que pueden prescindir de las pesadas y poco retribuidas labores en el campo.

La urbanización ha impactado negativamente en la identidad indígena y la vitalidad de la cultura purépecha, ya impactada por largas décadas de agresivo indigenismo integracionista.

Esto impactó en una generación de jóvenes y adultos que viven en marginación, que no migraron, que no alcanzaron a ser ciudadanos pero tampoco quieren ser campesinos y para quienes la identidad indígena no es un referente de sentido colectivo. Este sector fue cooptado para emplearse en el corte criminal de la madera y otras actividades ilícitas, situación que exacerbó la fragmentación social.

La presión sobre los bosques de la Meseta, cuya extensión disminuyó en 50% durante 50 años, proviene también de otra actividad controlada por la economía criminal: el monocultivo del aguacate.

El levantamiento de 2011 fue respuesta a este complejo entramado, y las posibilidades de construcción de un nuevo contexto social iniciaron por la revitalización de las relaciones interpersonales afectadas por la violencia –solidaridad entre vecinos–, lo que permitió la institución o reconstitución de estructuras comunitarias de deliberación y gobierno (fogatas, asambleas), de control del territorio y de seguridad. Actualmente Cherán cuenta con una capilar estructura de discusión y decisión, que orienta y controla el *Gobierno Comunal*. Esta estructura dispersa el poder y amplía los espacios de participación comunitaria.

La protección del territorio y la reconstrucción de vínculos comunitarios tienen una relación de necesidad con la valorización del territorio mismo (reforestación), el mejoramiento de la calidad de vida (obras y servicios públicos) y las actividades económicas basadas en el uso sustentable del territorio, a través de empresas comunales (vivero, resinera, recicladora de basura y purificadora de agua). Las Empresas Comunales muestran un incipiente interés hacia la construcción de alternativas económicas para la población local, acciones que aún no han alcanzado la madurez suficiente para enfrentar la problemática de exclusión y la violencia estructural que afecta a los habitantes de Cherán y la Meseta.

VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>



Laura Jiménez, de la Uzachi; Giovanna Gasparello, del INAH, y Paulina Garrido, de la Tosepan Titataniske.

# Guerreros del bosque: La lucha organizada de la Comunidad de Cherán

**Presentación: Miguel Macías** Presidente del Consejo comunal de Cherán **Edición: Gerardo Suárez** CCMSS

Un agudo proceso de deforestación colmó la paciencia de los habitantes de la Comunidad de Cherán, del estado de Michoacán, y los obligó a organizarse para detener el derribo de sus árboles por parte de grupos criminales que tenían la intención de instaurar huertos aguacateros en los montes de esta comunidad purépecha.

El comisariado del Consejo de Bienes Comunales, Miguel Macías, relata que el 15 de abril de 2011 comenzó un movimiento organizado de defensa del bosque y los recursos de la comunidad. Con este movimiento también se creó un nuevo modelo de gobierno autónomo. Este modelo es único en el país y está basado en asambleas de ciudadanos, comuneros y autoridades.

Los grupos delictivos derribaron 9 mil hectáreas de bosques, lo que afectó severamente la economía de la comunidad y propició un proceso de defensa de su territorio.

De las 18 mil 600 hectáreas con las que cuenta la comunidad, 13 mil hectáreas correspondían a bosques de pino y encino.

Sin embargo, los grupos delictivos derribaron 9,069 hectáreas de bosque, que representan el 71% de la cobertura forestal de la comunidad. Esto trajo consigo una severa crisis económica a la población porque el aprovechamiento de la resina de pino era la principal fuente de ingresos para muchas de las familias. “Sin sus árboles los comuneros ya no tenían de dónde sacar su resina”, comenta Miguel Macías.

“Aunque fue muy sufrida la lucha que tuvimos que dar como pueblo, hoy en día, prácticamente, no hay actos delictivos en Cherán, el bosque se está regenerado, la fauna está regresando y la gente comienza a recuperar su empleo”, detalla el Comisariado de Bienes Comunales.

Para evitar que vuelva a ocurrir este proceso de deforestación, la comunidad decidió en asamblea prohibir la siembra de aguacate en Cherán. A aquella persona que introduzca plantas o establezca huertas de aguacate en la comunidad se le sanciona.

El Comisariado resalta que “además de darnos alimentos e ingresos, los bosques forman parte de nosotros, los pueblos

indígenas tenemos una relación estrecha con el bosque, nuestros bosques sufren tienen miedo de ser devastados, por eso no queremos que sean talados”.

Luego del proceso de organización en la comunidad, a través de cuadradas y fogatas para vigilar que no entraran personas ajenas a la comunidad para talar sus bosques. Se formaron grupos y brigadas de defensa para frenar a los criminales. “Todo este proceso fue muy duro y dejó heridas muy sensibles, pero ha valido la pena”.

Con orgullo platica don Miguel que “la comunidad ha logrado recuperar a la fecha un total de 7 mil hectáreas de bosque y con esto estamos volviendo a conectar corredores biológicos y la fauna está comenzando a volver”.

Hoy Cherán cuenta con un vivero forestal con capacidad de producir 2.5 millones de plantas por año, que han servido para la reforestación de sus montes y para abastecer la demanda de pueblos vecinos que les compran plantas para restaurar sus predios degradados.

## **Resina para conservar el bosque**

La comunidad de Cherán está operando un programa de reforestación y rehabilitación de

plantaciones resineras que les permita generar empleos para los comuneros y volver a poner en marcha su industria resinera. “Con la extracción de la resina no tenemos que derribar los árboles, estos siguen en pie, la gente vigila el bosque y genera ingresos para sus familias. Además, la comunidad compra a mejores precios la planta resinera a los comuneros, así ya no tienen que negociar con coyotes que solían pagar a precios más bajos”.

Miguel Macías apunta que se encuentran en un proceso para frenar la desruralización, es decir la salida de la comunidad por parte de su gente a través de la siembra de variedades de pino de calidad en lugares apropiados, para que la gente vea que se puede vivir de la resina en el campo, en su tierra y con sus familias.

Un estudio evidenció que una hectárea de pinos resineros en producción pueden generar los mismos ingresos que una huerta aguacatera en Cherán, porque el aguacate se produce una vez por año, en cambio la resina se cosecha cada mes y se paga a buenos precios. Esta es una buena opción para que las familias de los comuneros de Cherán logren obtener mejores ingresos y decidan quedarse en el pueblo viviendo bien.

Además, el comisariado indica que la resina de pino de esa región es la de mejor calidad de todo el país y es valorada por la industria que la procesa. La resina tiene un sinfín de aplicaciones en las industrias cosmética, de pintura y alimenticia, entre otras.

“En Cherán en la mayoría de las tierras no se han usado qui-

micos ni herbicidas, de tal manera que se encuentran frutillas silvestres que conservaban nuestros ancestros y que nosotros conocemos como tomate dulce, beberegato (chile dulce) y la pitzekua, que es semejante al blue berry que nos traen de Estados Unidos, pero la que tenemos aquí es criolla y de menor tamaño por eso vemos que la mayoría de nuestras tierras aún permanecen saludables”, agrega Macías.

No obstante, el trabajo aún no termina, además del crimen organizado que tala el monte, la comunidad de Cherán se enfrenta a grandes agroindustriales que rentan tierras en la comunidad para la siembra de papa.

Don Miguel lamenta que “aún no hemos podido controlar el cuidado de las tierras completamente, ya que, desde hace dos años, han entrado en nuestra comunidad compañías dedicadas al cultivo de la papa y el verdadero problema es que utilizan muchos herbicidas y fungicidas, y hemos notado que eso perjudica al medio ambiente ya que reseca mucho la humedad de la tierra y afecta a las abejas, mariposas, chapulines, lombrices de tierra, entre otros organismos”.

En muchas otras regiones del país este modelo de renta de tierras para la producción intensiva de monocultivos ha erosionado los suelos, contaminado y secado los cuerpos de agua, y ha propiciado el abandono del campo de las familias dueñas de los predios.

Aunque en las cuatro asambleas de la comunidad de Cherán acordaron no permitir la entrada a esas empresas para la siembra de papa que están contaminando las tierras y acabando con el agua, varios poseedores de las tierras que se deciden a rentar sus parcelas se han opuesto a las resoluciones de las asambleas, esto debido a que les ofrecen un buen precio por la renta, pero no se dan cuenta que cuando su tierra ya no sirve no les van a pagar más y se quedarán también sin tierra fértil ni dinero.

La gente, en su mayoría, ya está muy consciente de la necesidad de conservar el bosque y de que para que logremos que siga en pie tenemos que estar muy atentos y ser muy comprometidos, porque nuestra comunidad es como una isla de árboles en medio de puras huertas de aguacate.

Cuando se terminen todos los árboles de las comunidades vecinas, apunta que “corremos el riesgo de que quieran venir a nuestros montes a cortar. Debemos detener ese proceso de deforestación a como de lugar. Por eso desde Cherán decimos ¡Ya basta con la deforestación! Invitamos a toda la gente a hacer conciencia sobre la importancia de los bosques para el medio ambiente y para la vida”.



Mural en Cherán K'eri (Cherán grande). Isabel Redies

# Tosepan: defender el territorio desde la producción



Canela, vainilla y café producidos y comercializados por integrantes de la Tosepan Titataniske. CCMSS

**Presentación: Paulina Garrido** Presidenta de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske  
**Edición: Gerardo Suárez** CCMSS

La Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske se ha ganado un reconocimiento nacional e internacional por su capacidad de organización interna, que le ha permitido diversificar su economía en más de diez cooperativas de producción, comercialización y servicios que contribuyen significativamente en el buen vivir de los socios y sus familias.

El objetivo central de esta Unión de Cooperativas, ubicada en la Sierra Nororiental de Puebla, es lograr el buen vivir de sus más de 38 mil socios y sus familias, en su mayoría indígenas, privilegiando siempre, la apropiación productiva de sus territorios de forma sostenible.

Paulina Garrido Bonilla, presidenta del Consejo de Administración de la Unión de Cooperativas Tosepan y primera mujer en ocupar este cargo, explica que la base del éxito de la organización que abanderada es la organización interna a través de la celebración de asambleas. “Las reuniones de asamblea son muy transparentes y todos respetan los acuerdos que se toman”.

La Tosepan acaba de cumplir 40 años de trabajo y organización, y celebró este aniversario con la elaboración de un plan estratégico para los próximos 40 años, “en el que establecimos que seguiremos buscando el yeknemilis, es decir, la vida buena a través de la formación de jóve-

nes para la producción y los principios cooperativos, junto con el fortalecimiento de la identidad indígena”.

No solo se trata de mejorar los ingresos económicos de las familias de los socios; la organización ve el buen vivir de una forma muy amplia: “las estrategias de la mejora de la calidad de vida tienen que ver con lograr hogares sustentables, pero no solo se trata de mejorar las condiciones de vivienda, sino de incorporar algunas ecotecnologías y aprovechar de forma eficaz los recursos naturales que tenemos. Estamos impulsando la instalación en los hogares de sistemas para la captación de agua de lluvia, la incorporación de paneles solares en las casas y así convertirlas en autosustentables energéticamente”, detalla Paulina Garrido.

Llegar hasta donde se encuentran hoy en día no ha sido sencillo y toda esta gran organización comunitaria enfrenta graves amenazas por las presiones sobre sus territorios y los recursos naturales que se encuentran en ellos, como la instalación de centrales hidroeléctricas, minas y la extracción de hidrocarburos.

“Es un gran reto para nuestra organización informar y organizar a las personas en torno a estos proyectos extractivos, porque no es sencillo que la gente encuentre datos e información confiable sobre estos proyectos en cualquier medio de comunicación, por eso organizamos

asambleas informativas; ya llevamos 23 asambleas informativas multitudinarias, en las que participan entre 3 y 5 mil personas de distintas comunidades indígenas y mestizas, además de muchos movimientos sociales de todo el país”, explica Garrido Bonilla.

Sin embargo, debido a su sólida organización comunitaria y a sus sistemas de difusión informativa entre las comunidades que integran la Tosepan han logrado hacer frente a estas amenazas en coalición con otras organizaciones y pueblos. Más de 10 comunidades ya se han decla-

rado libres de minería y fracking.

La presidenta de Tosepan refiere que la Unión de Cooperativas “participa activamente en un frente en defensa de su territorio y ha logrado frenar varios de estos megaproyectos extractivistas que se iban a asentar en sus territorios. Aunque esas luchas son muy extenuantes e incluso han cobrado la vida de algunos de sus integrantes, la comunidad está en pie de lucha”.

## Producción para el buen vivir

Más allá de las asambleas multitudinarias y las movilizaciones en contra de estos megaproyectos que pretenden despojarlos de sus territorios y recursos, la Tosepan cree que la mejor estrategia para lograr la defensa de su territorio es el fortalecimiento de sus cooperativas productivas y sus proyectos educativos y culturales. Apuestan por la formación de jóvenes y de nuevas generaciones en el cooperativismo con identidad cultural, “esto es fundamental para que la organización se mantenga sólida en el futuro”, apunta.

Paulina subraya la importancia de la amplia participación de las mujeres en la estructura de la Unión de Cooperativas, ya que el 68 por ciento de sus socios son mujeres y el 74 por ciento de todos los integrantes son indígenas. Estas cualidades le dan una mayor fuerza e identidad a todo el movimiento cooperativista de Tosepan.

Este origen indígena de las cooperativas es fundamental en las labores de producción agrícola, pues incorporan los saberes y prácticas milenarios de los pueblos maseual y tutunaku. Además, las familias campesinas han incorporado técnicas agroecológicas y orgánicas que les han permitido vender la producción en esquemas de comercio justo y sin intermediarios.

La diversificación productiva en las parcelas de los socios les

ha permitido tener una mayor estabilidad en sus finanzas, pues al no depender del precio de un único producto pueden aguantar las subidas y bajadas en los precios.

El café es el producto insignia de esta Unión de Cooperativas ya que, por su ubicación geográfica, las condiciones climáticas y el manejo que le dan los campesinos a las parcelas de café, su producción alcanza calidades que se reconocen en mercados internacionales y de especialidad. Sin embargo, el café es una *commoditie* que está sujeta a una gran inestabilidad de precio en los mercados internacionales, por ello ha sido muy importante la diversificación productiva y la búsqueda de mercados de especialidad.

Ahora, las parcelas de los socios son verdaderos jardines de café, no solo cafetales, cuentan con árboles frutales y maderables intercalados, también producen pimienta, canela, naranja, nuez, mamey, zapote, entre muchos otros frutos. “En una hectárea de una parcela de un socio se pueden encontrar hasta 150 plantas distintas que tienen usos medicinales, rituales y comestibles”.

Para procurar la conservación de esta gran agrobiodiversidad la comunidad acordó en asamblea en 2001 dejar de utilizar pesticidas y fertilizantes químicos. Se sustituyeron por compostas y fertilizantes orgánicos, además se adoptaron técnicas más sostenibles para el mejoramiento de los suelos y la conservación de la biodiversidad.

Estos cambios en la producción agropecuaria no son sencillos, implican todo un proceso de entendimiento de los productores, la adaptación de sus saberes y cultura. Asimismo, cuando se dejó de utilizar fertilizante químico la producción cayó porque los suelos y las plantas estaban acostumbradas a esos productos, sin embargo, con mejores prácticas, estudios sobre las dinámicas de los ecosistemas se ha logrado recuperar la productividad y ahora se producen más cultivos, ya no es un monocultivo de café.

Paulina Garrido apunta que el estímulo a la conformación de este tipo de proyectos comunitarios debería consolidarse en las políticas públicas para el fortalecimiento de la economía social y solidaria.

Resalta que “México, por sus características poblacionales y territoriales, tiene la posibilidad de replicar el modelo de Tosepan en otras regiones, lo que permitiría que más comunidades se organicen en emprendimientos productivos sostenibles que preserven la cultura, los recursos naturales y generen mayor bienestar para la población, pero es necesario buscar esos estímulos y diferenciación para fortalecer estas iniciativas”.



Tosepan: producir y conservar. Tosepan

# Para defender los bosques hay que conocerlos y trabajarlos: UZACHI

**Presentación:** Laura Jiménez Responsable del departamento no maderable de la UZACHI **Edición:** Gerardo Suárez CCMSS

Las comunidades rurales tienen todas las capacidades y los derechos para manejar y aprovechar los recursos naturales en sus territorios. Sin embargo, problemas de sobreexplotación, leyes inconstitucionales y que vulneran sus derechos, y la ausencia de políticas públicas de fomento al desarrollo de emprendimientos productivos sostenibles en los territorios rurales impiden que las comunidades, ejidos y pueblos indígenas mejoren sus condiciones de bienestar a través de la apropiación productiva de sus territorios.

Además, leyes como la minera y la reforma energética han propiciado un escenario de despojo de tierras y de los recursos naturales de las comunidades por parte de grandes empresas. La Ley minera, por ejemplo, establece que esa actividad extractivista tiene prioridad sobre cualquier otro uso de la tierra, además, las autoridades entregan concesiones mineras a particulares sobre cualquier territorio sin notificar siquiera a los legítimos dueños de esos predios.

Algo muy similar ocurría con los bosques del país hasta la década de los ochenta. El gobierno federal los concesionaba a empresas privadas o paraestatales para su aprovechamiento, en contraparte, los beneficiarios de las concesiones pagaban una

compensación irrisoria a los dueños de los territorios.

Durante la época de las concesiones forestales los bosques sufrieron una gran degradación, los empresarios no tenían el menor cuidado a la hora de extraer la madera, “seleccionaban solo los mejores árboles, ‘los descremaron’, por eso las comunidades se cansaron y en los años ochenta comenzaron con una movilización en la Sierra Juárez, en el estado de Oaxaca, para evitar que se renovarían esas concesiones por otros 25 años más”, explica Laura Jiménez, subgerente de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos-Chinantecos (UZACHI).

La lucha contra las concesiones fue un proceso arduo de movilizaciones en la sierra y las ciudades, que fue acompañado de un proceso legal para ampararse contra las concesiones forestales. Así, se logró que los legítimos dueños de los bosques recuperaran su derecho a manejarlos y aprovecharlos.

Pero las autoridades, resalta Laura, apostaban a que las comunidades no pudieran con el paquete que representaba manejar el bosque, porque “les impusieron una serie de requisitos que pensaron que no podrían cumplir, como la realización de los planes de manejo y las manifestaciones de impacto ambiental”.

Esta necesidad de contar con servicios técnicos forestales para

manejar sus recursos forestales abrió la puerta a la conformación de la UZACHI en 1989. Las comunidades zapotecas de La Trinidad Ixtlán, Santiago Xiacuí y Capulálpam de Méndez, así como la comunidad chinanteca de Santiago Comaltepec, decidieron conformar esta unión “con el objetivo de realizar un aprovechamiento forestal sustentable a través de la provisión de servicios técnicos propios, en donde colaboran profesionistas y técnicos originarios de estas comunidades”.

Recuperar su derecho a manejar los recursos forestales en sus territorios cambió radicalmente el panorama de estas comunidades de la Sierra Juárez. Les permitió conformar sus empresas forestales comunitarias, que hoy en día generan empleos para sus pobladores en la comunidad. La gente ya no tiene que emigrar a las ciudades en busca de trabajo.

Las empresas forestales comunitarias les generan ingresos económicos y recursos que se invierten en obras sociales como habilitación de escuelas, centros de salud, caminos, alumbrado, apoyos sociales para estudiantes y adultos mayores.

Además, el aprovechamiento de la madera no ha ocasionado deterioro en los bosques, por el contrario, intervenir el bosque lo vuelve más saludable, se reduce la probabilidad de que se incendie o se plague. Se renueva la masa forestal y se mejoran los servicios ecosistémicos que brindan los bosques como la



Manejo integral del territorio.

captura de carbono y la recarga de mantos acuíferos. Los bosques oaxaqueños tienen tasa de crecimiento por encima de los de países nórdicos como Noruega o Finlandia.

Laura Jiménez, originaria de Santiago Xiacuí, plantea que la gestión de territorio y, en particular, el manejo del bosque, implica una responsabilidad social y ambiental para todos los pobladores. “Si bien la generación de los ingresos económicos para los habitantes de la comunidad es un objetivo importante, tenemos claro que lo indispensable es la preservación del bosque, la conservación de los recursos naturales y la generación de los diversos servicios ecosistémicos, por lo tanto, en las actividades de manejo se busca renovar masas forestales, conservar espacios y especies únicas e importantes”, asegura.

Todas las actividades de manejo de los recursos naturales en las comunidades que conforman la UZACHI se discuten en asamblea, pasan también por la aprobación de los prestadores de servicios técnicos y solo se llevan a cabo cuando se aprueban por consenso. Así es en todos los eslabones de la cadena productiva.

La participación en la toma de decisiones a nivel comunitario es fundamental para la apropiación del territorio. “Es bien cierto que nadie defiende lo que no conoce, por lo tanto, si al interior de las comunidades se genera el conocimiento, si las personas se apropian del manejo del bosque y se replica el sistema de aprendizaje a las nuevas generaciones, la población originaria será quien, a corto, mediano y largo plazo, continúe manejando y defendiendo su territorio”, explica Laura.

“La gente va a seguir buscando la conservación de sus bosques y la defensa del territorio, ante riesgos ambientales y, sobre todo, ante amenazas de empresas transnacionales que buscan saquear lo que por años se ha conservado”, subraya la maestra Laura Jiménez.

Este 2019 la UZACHI cumplió 30 años de trabajo comprometido con el acompañamiento de las comunidades que la conforman para consolidar sus emprendimientos productivos sostenibles. Una de las claves de este éxito es la generación de capacidades locales, pues los mismos comuneros y comuneras son quienes asesoran, realizan cada una de las actividades al interior del bosque y generan conocimiento local a través de monitoreo participativo de la biodiversidad, del espacio productivo forestal, del suelo y el agua. Esto ha convertido a la unión en un referente a nivel nacional e internacional.

A través del manejo forestal, la gobernanza local sólida y el tejido social afianzado se ha mejorado la calidad de vida de los habitantes con la inversión de las utilidades provenientes de la comercialización de los productos forestales en obras y proyectos sociales.

Para Laura es un privilegio vivir en esta región de la Sierra Juárez, “acá tenemos una buena vida que es resultado de manejar los bosques de forma sostenible y de producir los alimentos con técnicas ancestrales”.

Sugiere que “sin duda alguna el modelo de manejo forestal y el fortalecimiento de la gobernanza de las comunidades se debe consolidar en todo el país, hay que continuar con la formación de las nuevas generaciones de jóvenes y niños, porque ellos serán los futuros líderes comunitarios, quienes tendrán la responsabilidad de buscar un beneficio comunitario, a través de la gestión y defensa integral del territorio”.

La subgerente técnica de la UZACHI añade que “las comunidades debemos fomentar la identidad cultural y la comunalidad para que los habitantes de las comunidades decidan radicar en su tierra, que participen en la toma de decisiones y se apropien del manejo de los recursos locales. Solo así tendrán la convicción de defender su territorio y buscar siempre el bienestar colectivo”. •



Hoy son los legítimos dueños de los bosques quienes los manejan y aprovechan. UZACHI

# Capulálpam de Méndez, sí a la vida, no a la minería

**Nézar Abdenago Arreortúa Martínez** Expresidente municipal y del Comisariado de Bienes Comunales de Capulálpam de Méndez

Capulálpam de Méndez es un municipio del distrito de Ixtlán, ubicado en la Sierra Juárez del estado de Oaxaca. Es una comunidad Indígena de la etnia zapoteca, cuyos orígenes datan del año 800 a 1200, según datos antropológicos de diversas tumbas prehispánicas encontradas en lugares aledaños a donde actualmente se encuentra asentada la comunidad. Por más de 430 años, esta población llevó el nombre de San Mateo Capulálpam en honor a San Mateo Apóstol, patrón de la comunidad. En 1936 el congreso local de Oaxaca por decreto le da el rango de villa a la comunidad, quedando a partir de esa fecha como Capulálpam Villa de Méndez, en honor a Miguel Méndez Hernández, originario de este lugar, fundador del Partido Liberal Oaxaqueño e integrante de la trilogía serrana con Benito Juárez García de San Pablo Guelatao y Marcos Pérez Santiago de Teococuilco.

El documento primordial que nos da la legítima posesión de nuestro territorio es de mayo de 1599, está avalado por el Virreinato de la nueva España (el documento original se encuentra resguardado en el archivo histórico del estado de Oaxaca); en él se reconoce a la comunidad de Capulálpam de Méndez como pueblo originario, dado que ya estábamos en este lugar cuando se dio la invasión española de 1519-1521. Este documento fue ratificado por el gobierno mexicano en agosto de 1952 y por sentencia del Tribunal Agrario en mayo de 1995. Actualmente lo conocemos como *carpeta básica de bienes comunales*.

Con estos antecedentes es de suma importancia para los habitantes de Capulálpam Villa de Méndez, seguir cuidando y defendiendo nuestro territorio ancestral heredado de nuestros antepasados, entendiéndolo como una fuente de vida para todos los que habitamos en él. Desafortunadamente, en el año

de 1775 un pelotón de soldados al pasar por nuestro territorio se percataron de la existencia abundante de minerales, dando inicio a una explotación de esos recursos. Al paso de los años y de acuerdo con las políticas públicas del país, estos yacimientos de minerales fueron concesionados a empresa mineras trasnacionales, las cuales elevaron la forma de explotación y saqueo de minerales, trayendo con ello daños graves e irreversibles a la forma de vida a los habitantes de Capulálpam y de las comunidades aledañas, así como contaminación a la ecología del suelo, agua y la salud.

Como consecuencia de esta explotación de minerales, en nuestro territorio se crea un asentamiento humano de manera irregular, formado por personas originarias de diferentes comunidades de la región y en algunos casos de otros estados de la república. Este asentamiento fue creciendo y por error de las mismas políticas del estado de Oaxaca en el año de 1939 por decreto del congreso del estado se le da la categoría de municipio al poblado de la Natividad, sin contar con un territorio propio, violentado flagrantemente el respeto a nuestro territorio como auténticos poseedores del mismo, esto aunado a la contaminación que

la explotación de minerales en nuestro territorio seguía causando. Por ello los habitantes de Capulálpam de Méndez decidimos iniciar una lucha para detener la explotación minera y con ello proteger lo que aún tenemos en nuestro territorio y todo lo que existe en él.

Por acuerdo de la Asamblea General de Comuneros y Ciudadanos de Capulálpam de Méndez en el año 2005 se declaró la lucha en contra de la minería bajo el lema **"Sí a la vida, no a la minería"** por el alto grado de contaminación al afluente del Río Grande, de varias hectáreas de tierras que ya no son aptas para la agricultura, desaparición de trece manantiales del territorio de Capulálpam, daños causados a la salud humana por los desechos tóxicos utilizados en el beneficio de los minera-

les y por los riesgos inminentes para la biodiversidad y manantiales que aún existen en nuestro territorio, por todo ello las autoridades municipales, agrarias y pueblo en general hemos realizado diferentes actividades y protestas de manera pacífica para que las autoridades del orden estatal y federal resuelvan esta situación, así como una lucha legal en los tribunales federales para que el caso sea revisado y se resuelva conforme a derecho.

Capulálpam ha demostrado en los pasados 40 años que una comunidad puede vivir y desarrollarse sin la explotación irracional de sus recursos, en especial de los recursos no renovables. Actualmente contamos con cuatro empresas comunitarias en las cuales generamos fuentes de empleo para nuestra

misma gente, con la seguridad de garantizar el buen vivir de sus familias. Las utilidades que estas empresas generan se aplican en obras de beneficio social y, lo más importantes, no causan daños irreversibles a nuestro territorio como la explotación de minerales, demostrando con ello que *la explotación de minerales en nuestro territorio no es desarrollo*, es enriquecimiento para unos cuantos, es un saqueo indiscriminado. Para nosotros como serranos y poseedores ancestrales de nuestro territorio es *destrucción, contaminación y muerte*. La explotación de minerales no es compatible con la biodiversidad.

Actualmente en la Sierra Juárez de Oaxaca, la Secretaría de Economía otorgó por 50 años las siguientes concesiones: en el distrito de Ixtlán, en los territorios de los municipios de Ixtlán de Juárez, Capulálpam de Méndez, Santa María Yavesía, San Miguel Amatlán y Santa Catarina Lachatao (estos tres últimos integran los Pueblos Mancomunados) 36 concesiones en 18,226 hectáreas y en el distrito de Villa Alta en los siguientes municipios: San Miguel Talea y Tanetze de Zaragoza, 3 concesiones en una extensión de 36,626 hectáreas, haciendo un total de 54,852 hectáreas. Todo esto sin el consentimiento libre previo e informado de las comunidades. Es un atentado contra la vida y la paz social que por derecho nos corresponde a los pueblos originarios. •



**Actualmente en la Sierra Juárez de Oaxaca, la Secretaría de Economía otorgó por 50 años 39 concesiones mineras en 36,626 hectáreas, en los territorios de Ixtlán de Juárez, Capulálpam de Méndez, Santa María Yavesía, San Miguel Amatlán y Santa Catarina Lachatao (los 3 últimos integran los Pueblos Mancomunados), San Miguel Talea y Tanetze de Zaragoza. Todo ello sin el consentimiento libre previo e informado de las comunidades. Es un atentado contra la vida y la paz social que por derecho nos corresponde a los pueblos originarios.**

# Apicultura para cuidar la selva y sostener a las familias mayas



“De las flores de los árboles de la selva se alimentan las abejas de nuestros apiarios, por eso es muy importante conservar el monte”.

**Presentación: Marcelo Chan** Presidente de la Cooperativa U Lool Che **Edición: Gerardo Suárez** CCMSS

La apicultura es una actividad económica central en la vida de miles de familias mayas de la Península de Yucatán. Con base en el manejo de sus apiarios y la conservación de la selva producen una de las mieles de mejor calidad en el mundo. Sin embargo, debido a procesos de deforestación por el avance de la agroindustria, el turismo y la urbanización, así como por la contaminación por el uso indiscriminado de agroquímicos, las poblaciones de abejas y su productividad han caído drásticamente en años recientes y está actividad milenaria se encuentra amenazada.

En el municipio de José María Morelos, en Quintana Roo, un grupo de productores apícolas decidió unirse para conformar una cooperativa de producción de miel y de esta forma lograr mejores precios en la venta de su producción, además de contar con capacitaciones, acompañamiento técnico y abasto de insumos a menor costo.

Los productores campesinos organizados tienen mayores posibilidades de comercializar su producción a mejores precios y resistir épocas de crisis como temporadas de baja productividad, periodos de caídas extremas de precios y acceso a financiamiento para equipar de mejor forma sus sistemas productivos.

El nombre de su cooperativa de producción de miel es U Lool

Che, que traducido del maya al español significa “flor de árbol”. “De las flores de los árboles de la selva se alimentan las abejas de nuestros apiarios, por eso es muy importante conservar el monte”, comenta Marcelo Chan Mo, presidente de U Lool Che.

Explica que su misión es ser una cooperativa sustentable, independiente económicamente e incluyente, “por eso nuestra meta es seguir protegiendo el territorio, las selvas altas y bajas de nuestra región enclavada en la zona maya del estado de Quintana Roo”.

“La apicultura y la meliponicultura son nuestros medios de vida y el bienestar de muchas familias de la península”, pero el avance de la agroindustria ha mermado su producción. Un caso ejemplar ocurrió en el verano del 2018, cuando un empresario originario de Yucatán ordenó actividades de fumigación en su terreno, un chilar cercano a los apiarios de la zona, con fipronil, un químico mortal para las abejas, que provocó la muerte de millones de polinizadores, la pérdida de colmenas y el impacto económico para varios hogares que viven de la producción de miel.

Se trató de dos fumigaciones, en la primera se perdieron 357 colmenas en 18 apiarios localizados en el Ejido Candelaria I. Las pérdidas por esta fumigación se calcularon en dos millones 300 mil pesos. En la segunda fumi-

gación, se afectaron entre 500 y 700 colmenas. Este acontecimiento que dejó a la deriva a decenas de familias de apicultores en José María Morelos, muchos de ellos socios de U Lool Che.

Además de la pérdida de sus abejas, cera y miel, los apicultores tuvieron que enfrentar la negligencia de las autoridades a la hora de denunciar el hecho. Las autoridades se negaban siquiera a levantarles la denuncia, alegando erróneamente que matar abejas no es un delito y que ellos no tenían competencia en delitos ambientales. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tampoco quiso intervenir, argumentando que el caso se trataba de un delito patrimonial y no ambiental.

Luego de que el caso se difundiera en medios de comunicación, las autoridades estatales accedieron a negociar con los afectados y el dueño del chilar. Al final, con la presión de las autoridades, los apicultores se vieron obligados a aceptar una

compensación por debajo de las pérdidas. Sin embargo, estos casos de fumigaciones aéreas y cambios de uso de suelo ilegales que afectan severamente a la producción apícola son recurrentes en la Península.

Los apicultores saben que sin selva no hay abejas y sin abejas no hay miel ni polinización, por eso los integrantes de U Lool Che decidieron integrarse en la Alianza Maya por las Abejas, Kaabnaaloon, que es una plataforma de incidencia para la protección y fomento de la apicultura y meliponicultura en la península de Yucatán.

Las organizaciones aliadas de Kaabnaaloon tienen presencia en 140 comunidades de los tres estados de la Península y están vinculadas directamente a la apicultura y a la meliponicultura. “Exigimos que se reconozca la importancia estratégica de la apicultura y la meliponicultura en los ámbitos social, ambiental, económico y cultural”, resalta Marcelo Chan.

**Ser un apicultor maya va más allá de producir miel, porque “las actividades de las cooperativas productoras y acopiadoras de miel orgánica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo contribuyen a evitar los estragos del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad”.**

Plantea que el país debe avanzar claramente en la formulación de una política para el fomento y la protección de la abeja, el apicultor y el territorio comunitario. Para ello, indica que “es necesario prohibir el uso de plaguicidas, para proteger a las abejas y a la salud de las personas y de los territorios; asimismo, hay que poner un alto a la deforestación, asegurar esquemas de comercio justo de la miel y aumentar el consumo nacional de este importante alimento”.

Ser un apicultor maya va más allá de producir miel, porque “las actividades de las cooperativas productoras y acopiadoras de miel orgánica en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, contribuyen a evitar los estragos del cambio climático y a la conservación de la biodiversidad”.

Destaca que los socios de U Lool Che conservan más de 6 mil 240 hectáreas de área forestal y paisaje milpero, “porque ahí se alimentan nuestras abejas. Contamos con 208 apiarios de 79 socios y socios en el municipio de José María Morelos”.

Prácticamente toda la producción de la cooperativa es orgánica, y ello implica que no se utilicen agroquímicos en la producción agrícola en donde pecorean las abejas de los socios, tampoco utilizan productos químicos en el manejo de sus colmenas. Sin embargo, los apicultores no pueden controlar todo lo que ocurre en su entorno y las fumigaciones y malas prácticas de otros actores como los agroindustriales que rentan tierras para la producción agrícola con altas cantidades de pesticidas y fertilizantes químicos los afectan severamente.

Marcelo Chan lamenta que los programas de apoyos a la producción agropecuaria privilegian a los grandes productores, que gastan grandes cantidades de agua y utilizan agroquímicos y pesticidas altamente tóxicos, en vez de impulsar la apicultura que contribuye de forma eficaz a la conservación de la selva y la biodiversidad que alberga.

Señala que, si se pierden estas oportunidades de emprender un proyecto productivo tan noble como la apicultura, en la que participa toda la familia y que les genera ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, la gente se verá obligada a emigrar de su tierra, a insertarse en puestos de trabajo en las zonas turísticas donde son discriminados y pierden su identidad cultural. Se alejan de sus familias y se rompe el tejido social.

El dirigente de la cooperativa U Lool Che asegura que el fortalecimiento de la apicultura maya es una forma de defender el territorio, el medio ambiente, la cultura y los medios de vida de las familias, “por eso exigimos que se de impulso a esta actividad y prohíban todas aquellas acciones que vulneran a las abejas”.



Que el viento y el sol generen beneficios para las comunidades, la misión de Yansa.

# Yansa: energía renovable comunitaria como motor de transformación

**Ximena Montaña** Responsable de coordinación y relaciones comunitarias de la Fundación Yansa

## La transición energética en México privilegia a multinacionales

La transición energética en México se ha dado bajo un marco normativo y de política pública que ha provocado serios impactos socio-ambientales, especialmente en regiones indígenas, y ha servido para empoderar y enriquecer exclusivamente a grandes multinacionales. Las comunidades no han podido tener un papel activo en la transición energética, su única opción es rentar sus tierras a las empresas y recibir un pago ínfimo. Esto ha provocado que la energía renovable sea vista de forma negativa.

La ley no prohíbe a las comunidades producir energía; sin embargo, las instituciones (Cenace, CRE, CFE) les ponen barreras imposibles de superar. Esta situación no es justa para

aquellas comunidades que tienen en sus territorios gran potencial eólico o solar y que desean emprender sus propios proyectos.

La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) permite la venta de energía bajo dos modalidades: trato directo entre empresas autorizadas y subastas organizadas por el gobierno a través del Centro Nacional de Control de la Energía (Cenace). En estas subastas se entregan contratos a los proyectos que ofrezcan el precio más bajo por la energía. Se aplica un algoritmo que únicamente considera factores económicos y técnicos (congestión de las redes eléctricas). No se verifica que esos proyectos tengan la anuencia de las comunidades donde se van a construir ni se comprueba que no vayan a provocar altos impactos socio-ambientales.

Cuando un proyecto logra un contrato por alguna de estas modalidades, aplica el artículo 71 de la LIE, que obliga a todos los órdenes de gobierno a agilizar y garantizar el otorgamiento de permisos y autorizaciones. Por otro lado, la LIE establece la obligación de las empresas de llevar a cabo Evaluaciones de Impacto Social que, en la práctica, son hechas por las mismas empresas a su conveniencia; y obliga al gobierno a realizar la "consulta" a las comunidades indígenas que se puedan ver afectadas. Se trata de "simulaciones de consultas" que incumplen los preceptos de libre, previa e informada.

Este escenario deriva en una alta concentración de megaproyectos en regiones con buenas condiciones para la generación de energía renovable, lo que está provocando fuertes impactos socioambientales acumulativos. Los ejemplos mas visibles y contundentes se están dando en el Istmo de Tehuantepec y en la Península de Yucatán.

## Importancia y ventajas de los proyectos comunitarios

Los proyectos comunitarios han sido fundamentales en el desarrollo del sector de energías renovables. Casi todos los proyectos fueron comunitarios hasta fines de los 1990. Las grandes empresas entraron en el sector a partir de la segunda mitad de la década de los 1990. Fueron llevados a cabo por cooperativas, campesinos y empresas comunitarias y se dieron en Dinamarca, Alemania y Ontario. La legislación en estos países se adaptó para facilitarles el acceso a financiación, permisos y contratos, entre otros.

La ley no prohíbe a las comunidades producir energía; sin embargo, las instituciones les ponen barreras imposibles de superar. Esta situación no es justa para aquellas comunidades que tienen en sus territorios gran potencial eólico o solar y que desean emprender sus propios proyectos.

Basados en estas experiencias, si bien los resultados de cada proyecto son diferentes, todos los expertos e instituciones coinciden en que los proyectos comunitarios generan beneficios locales mayores que los de empresas externas y generan un impacto indirecto mucho mayor en cuanto a capacitación, conocimiento, experiencia y empleo.

## La propuesta de Yansa

Yansa es una organización sin fines de lucro creada en 2008 en respuesta a violaciones de derechos y despojos territoriales cometidos por grandes empresas de energía renovable. Tiene la visión de que la transición de las energías fósiles hacia las renovables sea equitativa, justa y sustentable y promueva el empoderamiento de comunidades indígenas y su bienestar social. Su objetivo es contribuir a que la transición energética sea realizada en gran medida por las comunidades, con el fin de facilitar la redistribución efectiva de la riqueza y el poder.

Apoyamos a organizaciones comunitarias en defensa de derechos colectivos, impulsamos proyectos de energía renovable comunitaria y ciudadana de carácter social y promovemos cambios legales y de política pública conducentes a democratizar el sector energético. Nuestros principios y valores hacen que no apoyemos proyectos que vulneren a las comunidades,

sus derechos, territorios o bienes naturales, incluso si surgen del interior de comunidades.

Yansa consta de dos tipos de entidades: 1) Yansa Compañía de Interés Comunitario (Yansa CIC), empresa social sin accionistas ni fines de lucro, cuya función es el desarrollo y operación de proyectos con las comunidades. Puede llevar a cabo actividades comerciales, pero debe dedicar íntegramente sus recursos y utilidades a generar valor social para las comunidades. 2) Fundación Yansa, donataria autorizada que apoya la defensa de derechos y territorios, y el diseño de sistemas de gobernanza comunitaria para la gestión de beneficios derivados de los proyectos comunitarios.

Yansa facilita y acompaña proyectos comunitarios eólicos o solares de carácter comercial pero con fines sociales. Es decir, producir energía que será parcial o totalmente vendida a la red eléctrica, en comunidades indígenas que tengan el potencial y deseen llevarlos adelante en sus territorios, y dedicar los recursos generados por la venta de energía a suministrar energía gratuita a la comunidad (para riego u otras necesidades de la comunidad) y/o para cumplir fines sociales definidos por la comunidad. La comunidad será dueña del proyecto conjuntamente con Yansa y tomaremos juntos las decisiones en todas las fases del mismo.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)



Energía para el cambio.

Las comunidades no han podido tener un papel activo en la transición energética, su única opción es rentar sus tierras a las empresas y recibir un pago ínfimo. Esto ha provocado que la energía renovable sea vista de forma negativa.

# La 4T y los cafeticultores: duplicidades, contradicciones, ambigüedades...



Darío Celis inaugura el Congreso.

## Lorena Paz Paredes

**D**urante los primeros cuatro meses del 2019, las organizaciones de la CNOC apreciaban que en la actual Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) seguía dominando la visión y los intereses de las grandes empresas transnacionales como la Nestlé, y que no acababan de precisarse las nuevas políticas cafetaleras, ni el esperanzador cambio de rumbo respecto del pasado neoliberal.

En parte porque la Nestlé estaba orquestando un plan para aumentar la producción de café robusta, de menor precio y calidad que las variedades arábicas, que son las que siembran mayoritariamente los campesinos mexicanos, y dominar así el consumo nacional con su café soluble, elaborado con cafés robustas, mezclas de arábigos naturales, desmanches, azúcar y saborizantes. Y quería que el gobierno subsidiara la producción de 5 millones de quintales de este grano, en 150 mil hectáreas, de manera que pudiera aprovisionarse sin riesgos por 3 o 4 años. ¿A cambio de qué? A cambio de comprarle sus cosechas a cientos de cafeticultores y de crear nuevos empleos, ya que anunció una magna inversión de 154 mil millones de dólares para ampliar su planta de café soluble en Veracruz, entidad en la que por cierto, se sembrarían 80 mil hectáreas con este grano.

Por si fuera poco, los funcionarios de la Sader Veracruz provocaron confusión al decir que había recursos para nuevas plantaciones, y que el 80% de los cafetaleros de la entidad estaban

de acuerdo en sembrar robusta. Lo cual es falso, como en su momento aclaró Cirilo Etlán, del Consejo del Café de Coatepec, aunque tal noticia se difundió en diarios estatales y nacionales.

Los cafetaleros organizados en la Coalición Nacional de Organizaciones de Productores de Café, Conaprocafé, que reúne a varias agrupaciones del sector como la UGOCEP, la REDOSOC, la CCC, la CIOAC-JDL, el Barzón, FAOCC y la CNOC, entre otras, no estaban de acuerdo y se movilizaron, porque este proyecto provocaría sobreproducción y bajos precios y le exigieron al gobierno de la 4T que no se dejara chantajear por esta transnacional y en cambio atendiera las necesidades del sector productor y sus propuestas para salir de la crisis de bajos precios y reactivar la caficultura nacional. Finalmente, el gobierno federal prometió no embarcarse en ese proyecto. No obstante en abril, mediante el programa "Sembrando Vida" de la Secretaría del Bienestar Social, se tenían 7,500 hectáreas para café robusta en el Soconusco, Chiapas, con árboles de sombra, en el proyecto de reforestación. Se argumentó que con esto se dejaría de importar este grano aromático y la Nestlé podría abastecerse en el país de parte de sus requerimientos.

Según los productores de la CNOC y la CEPACO, aunque sea una extensión mucho menor, es riesgosa, pues "aunque nos dicen que los robustas y los suaves o arábicas, no compiten por ser plantaciones de alturas diferentes, sí compiten por los precios y nos van a empobrecer. No que-

remos una política de robustización en México".

## Plagas a la alza, precios y producción a la baja

En México viven del café más de 500 mil pequeños productores, la mayoría indígenas de 25 grupos étnicos, además de millones de familias jornaleras que se emplean en la temporada de corte. Después del maíz es el cultivo que más gente del campo involucra. Pero desde hace cinco años ha decaído la producción a causa del hongo de la roya, que apenas empieza a controlarse. Además los cafeticultores sufren una crisis de bajos precios, y por eso muchos han tenido que abandonar sus tierras y buscar la vida en otro lado.

En los ciclos 2015 y 2016, la enfermedad de la roya se ensañó en los cafetales y la producción nacional se desplomó a 2.2 millones de sacos de café (de 60 kilos), cuando el promedio anterior había sido de 4.5 millones. Gracias al esfuerzo de los productores por renovar sus plantaciones, este ciclo se espera un aumento similar. Pero ahora que habrá café no hay precio.

De 2017 a 2018 las cotizaciones se desplomaron en 40%, es decir que en la última cosecha, el quintal de café se pagó apenas a \$1500, cuando en el ciclo anterior llegó a valer \$2600. La

CNOC advirtió que si los precios seguían a la baja, los productores no recibirían ni el 50% de un ingreso remunerador de sus costos. Lo que ya es mucho decir. Y como el café es un grano atado a las cotizaciones internacionales, también se alertó de que si en la Bolsa de valores de Nueva York el precio de referencia llegaba a menos de 120 dólares las 100 libras, sería necesario compensar con recursos adicionales a los productores para que se animaran a cosechar en el siguiente ciclo. Por lo pronto los precios están perfilándose en 97 dólares las 100 libras, y con el incremento en la producción mundial de robustas puede tirarse hasta 72 dólares.

## Compensación a los productores

En el actual organismo rector de la caficultura, el Sistema Producto Café Nacional, cuya figura jurídica es la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café A.C. (Amecafé), se maneja un fondo compensatorio creado con aportaciones de los productores. Y a decir de la CNOC, para resistir el mal momento, este Fondo (FIRCAFÉ) tendría que devolver recursos a los productores aportantes en compensación de la caída de las cotizaciones, pero también debería hacerlo el gobierno, pues la tendencia a la baja seguirá hasta el próximo ciclo.

En el 2018 el FIRCAFÉ contaba con 975 millones de pesos de 320 mil productores aportantes, montos muy pequeños cada uno. Hasta julio del 2019, había entregado 520 mil millones de pesos a 110 mil productores.

Ante el bajón de precios –que empezó por el 2017– se pidió al gobierno federal que contribuyera con 1800 millones de pesos de recursos fiscales para compensar al productor e incentivar la cosecha 2018-2019.

En el año que corre, la predicción se cumplió pues hubo sobreproducción mundial de café y los precios siguieron en el suelo.

## Qué pasó con la política cafetalera este año

Antes los programas de fomento al café se manejaban desde la

Sagarpa. Hoy intervienen dos Secretarías con criterios diferentes: la del Bienestar y la Sader.

La primera a través del programa 'Sembrando Vida' anunció que durante el sexenio apoyaría nuevas plantaciones de café en 200 mil hectáreas, empezando con 50 mil en 2019, y aportando un apoyo fiscal de 5 mil pesos mensuales a cada nuevo productor hasta completar los 60 mil pesos al año. Estimular nuevas plantaciones, a decir de la CNOC, también puede deprimir los precios. Los productores se preguntan si conviene saturar el mercado, dónde y cómo comercializar ese café y en qué lugar quedan las organizaciones de pequeños cafeticultores.

Por su lado la Subsecretaría de la Sader, a cargo Víctor Suárez Carrera, anunció que se darían entregas directas e individualizadas de recursos fiscales a cañeros y cafeticultores mediante el programa de Producción para el Bienestar por un monto de 1,200 millones de pesos, de los que le corresponderían 5 mil pesos a cada cafeticultor para la compra de planta, paquetes tecnológicos y pago de trabajo. Aparte, en la Subsecretaría Agricultura de la Sader hay un programa de asistencia técnica y recursos para la adquisición de despulpadoras.

Lo cual quiere decir que operan dos fuentes de recursos y de programas de apoyo a la caficultura, lo que no estaría nada mal si hubiera buena coordinación institucional, y si los criterios, padrones y mecanismos operativos en las regiones del café fueran los mismos. Pero por desgracia no ha sido así, y se han enredado padrones, lineamientos y operación.

## Presupuestos, programas y desatinos en lo que va del 2019

En enero de este año los productores de Conaprocafé, CNOC, UNPC-CNC y el Sistema Producto Café Nacional, acordaron con la Secretaría de Bienestar Social y la Sader, entre otras cosas, nombrar una comisión de organizaciones y los sistemas producto café estatales definir políticas cafetaleras, y caminar hacia la formación de un Instituto o Comisión Nacional del Café capaz de impulsar un desarrollo integral en beneficio de las familias campesinas.

Este año la Cámara de Diputados no incluyó un desagregado del presupuesto cafetalero. Pero la Sader anunció que →

En México viven del café más de 500 mil pequeños productores, la mayoría indígenas de 25 grupos étnicos, además de millones de familias jornaleras que se emplean en la temporada de corte. Después del maíz es el cultivo que más gente del campo involucra.

→ se encargaría del Programa Integral de Atención al Café (PIAC) rebautizado ahora como Subicafé, (para mejorar productividad y calidad del café), al que se le asignaría el mismo presupuesto de años anteriores, 785 millones de pesos, y bajo el mismo esquema de dar el recurso a través de organizaciones y productores individuales.

En marzo se difundió la convocatoria del Subicafé, que incluía a productores y organizaciones. Muchas solicitudes se presentaron a través de sus agrupaciones. La Comisión de los productores y la Sader acordaron utilizar un padrón de hasta 250 mil beneficiarios para la dotación de los 5 mil pesos por productor, también se decidió conformar un grupo operativo que daría seguimiento al programa en las regiones cafetaleras.

A pesar de que en mayo ya había recursos y un padrón para el arranque, todo empezó a enredarse, pues desde la Coordinación Nacional de los Programas para el Bienestar Social, es decir desde la otra Secretaría, se establecieron nuevos lineamientos operativos, donde se asignaba facultades a los delegados federales y servidores de la nación para recibir solicitudes, validar beneficiarios y meterlos a un nuevo padrón de Bienestar Social. Hubo controversias y jalones en los estados y regiones: los de Bienestar Social se negaban a hacer los grupos operativos y querían validar e integrar otro padrón de solicitantes, pidiendo a los ya registrados entregar de nuevo sus papeles. Y en algunas delegaciones federales se bloqueó a productores que estaban en el padrón inicial para meter a otros.

Además están manejándose padrones empalmados de programas sociales y programas productivos de café, de manera que una persona que recibe un apoyo como adulto mayor, ya no puede acceder al recurso de Subicafé aunque sea productor.

También hubo confusión en el mecanismo de pagos: primero se dijo que serían por medio de tarjetas de bienestar social, luego que órdenes de pago, al final se regresó a las tarjetas.

Este enredo y el desacuerdo entre instituciones llevó a un retraso en la entrega de los recursos, que empezaron a fluir hasta octubre, lo que es grave porque no ha habido dinero para atender los cafetales renovados y la cosecha está empezando.

¿Cómo enderezar el rumbo, cómo deshacer los entuertos?

### ¿Que proponen los cafetaleros?

La Comisión de los productores y la Amecafé proponen varias cosas:

- Una coordinación efectiva entre las dependencias del gobierno federal encargadas de políticas y programas para el café, y con la representación de los productores, para concretar estrategias cafetaleras adecuadas a las necesidades de familias y comunidades.
- Un programa unificado de fomento integral a la cafecultura (de ambas Secretarías) y desligado de los programas sociales.
- Integrar un padrón único de productores de café.
- Impulso a la producción de cafés de sombra diversificada que protege la biodiversidad y proporciona servicios ambientales, y que no incluyan nuevas plantaciones de robusta en el esquema de la empresa Nestlé.
- Recursos adicionales compensatorios de la caída de precios.
- Fomento al consumo nacional del café de los productores.
- Crear una Comisión Nacional del Café capaz de frenar la voracidad de las compañías trasnacionales sobre las plantaciones del sector social, es decir, que cierre el arrendamiento de tierras cafetaleras a industriales, regule los precios del café al productor y al consumidor, vigile importaciones de grano, diseñe políticas y programas a favor de los pequeños productores y sus organizaciones.

Hasta ahora hay quejas y molestia por la dispersión y el rezago en la entrega de recursos. E inconformidad de las agrupaciones cafetaleras por la entrega individualizada al productor, de recursos fiscales que antes manejaban sus organizaciones para actividades necesariamente colectivas como el acopio, la comercialización, la asistencia técnica, la capacitación, el financiamiento, lo que debilita el escenario organizativo de los pequeños cafecultores construido con tenacidad por décadas.

En el XV Congreso de la CEPSCO, realizado en Oaxaca, donde delegados de 33 organizaciones regionales del café festejaron el 30 aniversario de esta Coordinadora, se dijo que hoy más que nunca se necesitan políticas públicas que incluyan a organizaciones, que no todas son corruptas ni clientelares, y en cambio hay muchas, sobre todo del gremio cafetalero, comprometidas con el bienestar de familias y comunidades. •



30 años funcionando democráticamente...

## CEPCO: 30 años de lucha y esperanza para vivir mejor

Lorena Paz Paredes y Rosario Cobo

Los días 23 y 24 de octubre, la Coordinadora Estatal de Productores de Café (CEPCO) celebró su XV Congreso y su cumpleaños número 30. Se juntaron cerca de 600 personas en la Casa del Pueblo de la ciudad de Oaxaca. Eran delegados y delegadas de 33 agrupaciones cafetaleras de ocho regiones del estado. Ahí estaban hombres y mujeres de todas las edades, zapotecos, mixes, cuicatecos, mixtecos, mazatecos, chinantecos, llegados de remontadas comunidades después de viajar en transporte y a pie, a veces dilatándose dos días.

También estuvieron presentes el asesor de la CNOE, el presidente de Amecafé, servidores públicos de la Sader, FIRA, Conafor, del gobierno del estado, amigos y colaboradoras, y Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de comunicación social de la Presidencia de la República, quién tomó protesta a la mesa directiva electa y clausuró el evento.

Durante dos días se debatieron los problemas que en este año han vivido los cafetaleros. Al empezar, los directivos dijeron que llegan al Congreso con sentimientos encontrados, pues aunque el gobierno está entregando muchos recursos al café "a razón de 5 mil pesos por productor, no vemos con claridad una propuesta de política cafetalera integral: no hay un padrón confiable, no se han concretado las compensaciones por bajos precios, no hay campañas para promover el consumo interno de cafés de calidad, no se reconocen los beneficios ambientales del café de sombra, no hay una política de inclusión financiera, ni adecuada a nuestras necesidades". Y el escenario es malo, pues las cotizaciones del

grano aromático van a la baja y el presupuesto para la cafecultura, también.

Fernando Célis, asesor de la CNOE, señaló que la política del nuevo gobierno federal, de entregar todos los apoyos fiscales directamente al productor y ninguno a través de sus organizaciones, como una forma de terminar con la corrupción y el clientelismo que privaba en éstas, hace tabla rasa de todas ellas, y hay cooperativas con una larga trayectoria, fuertes, democráticas y transparentes en el manejo de recursos como la CEPSCO. Lo que apuntaló en cifras Paco Abardía, amigo de la Coordinadora oaxaqueña: "haciendo sumas, en estos 30 años -dijo- ustedes, delegados, delegadas, técnicos y asesores de la CEPSCO, han invertido en asambleas como está, más de 29,000 días de esfuerzo. Y eso no es fácil.

Uno de los acuerdos más notables, votados a mano alzada, fue que los productores aportarán el recurso fiscal recibido de manera individual, a la Coordinadora, para que ésta realice, como antes lo hacía, 'compras consolidadas' o en común, de insumos para la producción de café. Con lo que se garantiza un uso productivo del dinero y se le da seguimiento. Se trata de una decisión libre, ya que ningún productor está obligado a tal cesión.

Al final del Congreso se eligió a la nueva Mesa Directiva, y el presidente entrante, Alberto Leobardo Sánchez, de la región de Zaragoza Itundujia, quien aprovechó la presencia de Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, para enviar un mensaje al ejecutivo.

"Hoy, las y los productores de la CEPSCO estamos demostrando que hay organizaciones que sí funcionan democráticamente... El mensaje a nuestro Presidente es que se haga pronto una depuración de organizaciones fantasma, ésas que solo utilizan a la gente para bajar recursos y son clientelares."

Celebrar los 30 años de vida de un ensamble de agrupaciones de pequeños cafecultores es una proeza, porque desde 1989 están organizados y a la fecha siguen empeñados en mantenerse trabajando juntos. Hoy suman 3260 los socios y socias de 45 agrupaciones regionales de ocho regiones, y de 131 comunidades regadas en 37 municipios del estado. Son productores de café orgánico de sombra, exportan su grano en el sistema del comercio justo y orgánico, tienen cafeterías donde venden café de la marca "La organización", empresas de comercialización, de financiamiento, y programas de diversificación de cultivos, de vivienda y cuidado del medio ambiente.

Una Coordinadora que desde hace tres décadas trabaja por el bienestar campesino. •

Celebrar los 30 años de vida de un ensamble de agrupaciones de pequeños cafecultores es una proeza, porque desde 1989 están organizados y a la fecha siguen empeñados en mantenerse trabajando juntos.



Familia campesina de la cuenca de Amanalco-Valle de Bravo.

## Arranca acompañamiento técnico para impulsar la agricultura sustentable

Subsecretaría de Alimentación y Competitividad,  
Secretaría de Agricultura

**E**n un esquema de colaboración entre la Secretaría de Agricultura y la Universidad Autónoma Chapingo (UACH), el programa Producción para el Bienestar (PpB) puso en marcha su componente de acompañamiento técnico, que tiene como tarea sustancial impulsar prácticas agrícolas sustentables, con respeto al medio ambiente, que serían la base de la construcción de un sistema agroalimentario justo, sustentable y saludable.

“Fortalecer las capacidades de las y los productores del programa PpB para transitar a sistemas agroalimentarios más sostenibles, productivos y resilientes, que permitan mejorar la autosuficiencia alimentaria de maíz, frijol, milpa, trigo y arroz”, es como se describe formalmente el objetivo del componente, y desde la perspectiva del titular de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad, Víctor Suárez Carrera, “esto viene a ser la tarea más importante de la Subsecretaría”.

El acompañamiento técnico involucrará 78 territorios (45 de maíz, 13 de milpa, siete de frijol, seis de arroz y siete de trigo panificable), divididos en 14 regiones, desde el noroeste hasta el sureste, pasando por el Bajío y el Centro. En una primera etapa, a iniciar desde ya, se tiene previsto atender a 120 mil productores de pequeña escala, con predios de menos de cinco hectáreas, todos ellos beneficiarios de la vertiente de apoyo a granos de Producción para el Bienestar.

Cabe señalar que PpB cuenta con un padrón de más de un mi-

llón 700 mil productores de granos apoyados este 2019. Los 120 mil con que se inicia es un primer paso y se irá aumentando el número.

“El acompañamiento técnico es motor principal del PpB, que es un programa prioritario del Gobierno de México y con horizonte multianual porque está considerado en el Plan Nacional de Desarrollo, y tendrá soporte constante si hacemos bien nuestro trabajo”, comenta el subsecretario y puntualiza:

“La tarea que tendremos en el acompañamiento técnico de PpB está enmarcado en la Cuarta Transformación de la vida pública y es muy importante que todos [funcionarios, coordinadores, técnicos agroecológicos y sociales y productores] tengamos una misión compartida, una misma

filosofía, una misma mística y un mismo compromiso. No estamos cumpliendo un contrato más o un trabajo más, sino que esto es parte de un proceso de transformación histórica en el país, y en el campo mexicano en particular. Este proceso, que desmantela todo lo construido por el neoliberalismo, tiene un énfasis especial en el rescate del campo por una diversidad de razones, razones transversales: justicia social, soberanía nacional, autosuficiencia alimentaria, salud y nutrición, creación de empleos rurales, crecimiento económico, manejo sustentable de los recursos, apoyo a la reconstrucción de la cohesión familiar y comunitaria, preservación y valorización de la biodiversidad, aporte a la paz social... Su fundamentación es muy amplia, no se trata solo de un tema de productividad, de producción”.

El acompañamiento técnico se desarrolla en distintos niveles

(nacional, regional, local y con el productor individual) y con un aterrizaje muy claro en los territorios, e involucra a técnicos de campo y a becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JFC) de la Secretaría del Trabajo, todos ellos induciendo un desarrollo local comunitario y una transición agroecológica, en un marco de coordinación de diversas instituciones del Gobierno de México, junto con la Secretaría de Agricultura.

Asimismo, considera el establecimiento de escuelas de campo con la metodología De Campesino a Campesino, pues parte clave del esquema consiste en abreviar del conocimiento de los productores, quienes acumulan sabiduría milenaria y prácticas acendradas dentro de la lógica de la preservación y cuidado de los recursos naturales.

Se tiene claro que Sabiduría Campesina más Conocimiento Científico Aplicado da como resultado una Agricultura de Conocimientos Integrados (ACI).

Los pasos del acompañamiento técnico

Todo el proceso inicia en el marco de asambleas comunitarias, espacio clave y fundamental donde se realiza la programación de la capacitación; donde se aprende a elaborar bioinsumos y mejoradores de suelos, y donde se transmite el conocimiento de las prácticas agroecológicas. Allí mismo, los productores, los técnicos y los becarios de JFC definen esquemas financieros para la producción.

El esquema propicia que los productores se agrupen en Módulos e Intercambio de Conocimientos e Innovación (MICI); cada MICI integra a cien productores, tres productores innovadores, tres escuelas de campo, técnicos de campo y promotores agroecológicos (becarios de JFC).

Los integrantes de MICI realizan, módulo por módulo, una evaluación comunitaria participativa respecto de sus predios productivos; generan un diagnóstico territorial y parcelario, con la caracterización territorial y un mapeo organizativo y definen sus sistemas de producción y sus planes de manejo agroecológico.

Se realizan giras de intercambio entre módulos y dentro de ellos mismos. La asistencia técnica, la planeación y la ejecución del Plan de Manejo Productivo y de Comercialización se realizan en dos ámbitos: en campo (con técnicos agroecológicos y con la organización social), y en el ámbito de especialización (con especialistas por tema e investigadores). También se desarrollan talleres de capacitación e intercambio con productores.

Se considera también que las y los productores agrupados en MICI avancen en el desarrollo social/organizativo, por medio de su participación en las asambleas comunitarias; el fortalecimiento y auto-organización de productores y la articulación con otros actores en los territorios. La transición agroecológica la realizarán los productores MICI en escuelas de campo y con productores líderes incorporando la mayor cantidad de prácticas agroecológicas.

La acción de los MICI se articulará con otras políticas públicas, esto es con el resto de programas prioritarios de la Secretaría de Agricultura, como Precios de Garantía, Canasta Básica, Crédito Ganadero a la Palabra, Pesca y Cuencas Lecheras del Sureste. También se articulará con otros programas del Gobierno de México, de instituciones diferentes a la Secretaría de Agricultura.

La coordinación y sus actores  
La estructura de coordinación y ejecución del componente de asistencia técnica involucra: la coordinación general (en manos de la Secretaría de Agricultura y la UACH); luego “especialistas temáticos”, quienes coordinarán el trabajo de organización territorial, la transición agroecológica y la formación en políticas públicas; luego “especialistas nacionales”, que suman 55, y que se enfocan en territorio, políticas públicas, producción y formación; después “coordinadores regionales”, distribuidos en los 14 territorios, y por último, 396 técnicos de campo, unos con especialidad en agroecología y otros de corte “social”, esto es más involucrados en la organización de los campesinos, con una visión y perspectiva cultural local.  
¿Qué esperamos de este proceso de acompañamiento técnico?

- En lo organizativo: diagnósticos territoriales y de actores; una revitalización de la organización local en distintos niveles (ejido, comunidad, organización social o económica), y redes de colaboración en diversos ámbitos (entre productores, entre productores y Agricultura; entre productores e instituciones de gobierno local, estatal y nacional; interinstitucional, etcétera).
- En lo productivo: producción local de bioinsumos y de semillas, conservación de suelos, rescate y aprovechamiento de la biodiversidad y obras de captación y almacenamiento de agua.



Apiario de don Seniorino Martínez en la comunidad de San Francisco Ozolotepec, Oaxaca. Ángela Mendoza

# Acceso social a la tierra: un camino para producir nuestros alimentos

Jesús Guzmán Flores Investigador del CEDRSSA



Parcela productiva.

Aunque se reconoce que en el mundo se producen suficientes alimentos para atender las necesidades de alimentación de toda su población, los datos de la estadística alimentaria nos dicen que uno de cada siete de sus habitantes vive en situación de hambre, que casi la mitad esta malnutrida y que una cifra igual vive con miedo a padecer hambre, pues sus

ingresos o sus condiciones de vida o de residencia, les hacen difícil acceder a los alimentos.

Por lo anterior, el tema alimentario forma parte de las agendas políticas de los gobiernos y cada día son mayores las acciones de organizaciones ciudadanas para atender sus necesidades alimentarias. Las formas en que se ha estructurado el sistema alimentario mundial y sus componentes en cada país y localidad del mundo hacen imposible que se garantice el acceso a los alimentos a amplios sectores de la población, en las cantidades y calidades que requieren de acuerdo con su cultura, sexo, edad y actividades que realizan.

El mundo experimentó durante el siglo XX un acelerado proceso de industrialización y urbanización, que tuvo como consecuencia que amplios sectores de la población ya no participaran en la producción de sus alimentos. La población campesina que tradicionalmente producía sus alimentos se redujo con respecto a la que se ocupa en las actividades manufactureras y de servicios, y la que continúa

en las actividades agropecuarias y pesqueras fue compelida por diversos medios a especializarse en producir únicamente determinadas especies, por lo que su producción para el autoconsumo también se redujo, teniendo que recurrir a los mercados para adquirir sus alimentos.

Las políticas alimentarias de los Estados nacionales que en algunos países consideraron el facilitar el acceso a la tierra y al agua, prácticamente han desaparecido; de igual manera, otras acciones públicas de fomento a la producción y distribución de alimentos, también se eliminaron, por lo que el abasto de alimentos en el mundo está determinado en gran medida por grandes empresas transnacionales que controlan tierras e insumos agropecuarios, así como el procesamiento y distribución de alimentos; por lo que la alimentación mundial tiende cada día a homogenizarse en cuanto a los alimentos que se consumen y a las formas de producirlos y distribuirlos.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)

# Respuestas frente a la crisis ambiental

Leonardo Bastida

En las pasadas décadas, las leyes ambientales han estado lejos de satisfacer las necesidades del país y de la sociedad. En los pasados 25 años, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en materia ambiental vivimos un retroceso, pues las leyes se acoplaron para facilitar la entrega de los recursos naturales nacionales como el agua, los alimentos, los minerales y las tierras a empresas nacionales y transnacionales sin restricciones ni regulaciones estrictas, advirtió Leticia Merino, coordinadora del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI) de la UNAM.

Reflejo de lo anterior es que aquellas empresas que cometen delitos ambientales solo son multadas con unos cuantos miles de pesos y pueden continuar con sus operaciones sin restricción alguna y que bajo el pretexto de atraer inversión económica se ha desregulado todo lo relativo a cuestiones ecológicas sin tomar en cuenta que muchas actividades de extracción o de otro tipo de explotación de recursos naturales pueden tener un pasivo ambiental y social considerable, comentó para *La Jornada del Campo*, la académica del Insti-

tuto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Agregó que es un mito que la regulación en materia ambiental alejaría la inversión económica, pues las empresas cumplen las normativas de otros países, que suelen ser muy estrictas.

## Multiplicidad de enfoques

A propósito de esta situación, el SUSMAI dio continuidad a la *Agenda Ambiental 2018 Diagnóstico y propuestas*, una publicación enfocada a plantear una serie de propuestas de políticas públicas en diferentes temas relacionados con el medio ambiente, el manejo sustentable de recursos naturales y la seguridad alimentaria, entre otros, y recién publicó el libro *Crisis ambiental en México. Ruta para el cambio*, el cual conjunta las aportaciones de decenas de especialistas para elaborar propuestas de acción inmediata ante una problemática de posible corte irreversible.

Subdividido en las temáticas de agua; agricultura, alimentación y suelos; agroecología y agrobiodiversidad; las condiciones de la biodiversidad; política federal sustentable e incluyente; mares y costas del país; la transición energética; actividades mineras y derecho humano al medio ambiente, cada capítulo

plantea la problemática actual, y a manera de conclusión, brinda propuestas para la resolución de cada uno de los temas abordados.

El reto es tener la visión sobre los distintos temas y generar respuestas o el daño ecológico será irreversible, aseguró la también coordinadora del libro *Encuentros y Desencuentros. La política forestal en tiempos de transición política*.

## Larga historia

La introducción del texto, elaborada por Leticia Merino y Alejandro Velázquez, hace un recuento de los cambios en materia de normatividad ambiental llevados a cabo en el país en las pasadas tres décadas. Al respecto, la propia coordinadora del compendio refiere que la Ley de Minería, modificada en 1992, permitió que las mineras tuvieran acceso a las tierras bajo el rubro de ocupación temporal, la cual, podría durar hasta 50 años, permitiéndoles desarrollar su labor en cualquier espacios, incluidas áreas naturales protegidas y sitios patrimoniales, como en el sitio arqueológico de Xochicalco, en Morelos.

Esta misma industria también tiene permitido continuar utilizando cianuro y mercurio en los métodos de extracción y gozando de acceso preferente al agua,

a pesar de que, en varios casos, se deja a comunidades sin el líquido. Aunado a que los desastres ecológicos que generan las industrias extractivas solo son causa de una sanción económica pero no del retiro de una concesión, que aún se permite la minería a cielo abierto, y que 80 por ciento de lo extraído se exporta, con una contribución al Producto Interno Bruto de únicamente uno por ciento.

Para la investigadora es claro que no puede haber desarrollo económico si las ganancias llegan a manos de pocas personas y las consecuencias las paga toda la población. Por ejemplo, en materia de aguas, las empresas que tienen las concesiones de aguas se la están acabando, dejando a poblaciones enteras sin acceso al líquido, y por otra parte, las industrias vierten grandes cantidades de tóxicos en los caudales, contaminándose más de 50 por ciento del agua disponible en territorio nacional.

Por el contrario, sostiene que es urgente apoyar a empresas campesinas y de manejo forestal como se hace con las mineras y otros tipos de industrias además de reconocer sus derechos a aspectos básicos como el acceso al agua, la cual está concesionada a cerveceras, refresqueras, mineras y agroindustrias pero no

a los pequeños productores, que son el sostén de disponibilidad de alimentos que llegan a nuestras mesas.

Los ecosistemas deben estar en manos de las comunidades, las cuales mantienen un conocimiento tradicional sobre el uso de sus recursos, pero también hay integrantes de las mismas que se han formado en universidades y retornan a sus comunidades para compartir ese conocimiento, aseguró la especialista.

## Emergencia amplia

La emergencia ambiental actual que se vive en el planeta no solo corresponde al cambio climático, es una situación mucho más amplia, ya que se está perdiendo biodiversidad en más de 40 por ciento, lo cual implica crisis como la pérdida de polinizadores, una situación que a futuro puede derivar en la escasez de frutas y verduras y el exceso de granos; la acidificación de los océanos; la contaminación por químicos, de la cual se desconoce el impacto real; el agotamiento de cuerpos de agua dulce; la alteración de los ciclos del nitrógeno y del fósforo en el agua, disminuyéndose el oxígeno disponible en la misma, surgiendo problemas como el sargazo.

[VERSIÓN COMPLETA EN LÍNEA >>](#)

En México aquellas empresas que cometen delitos ambientales solo son multadas con unos cuantos miles de pesos y pueden continuar con sus operaciones sin restricción alguna.



## ¿Biofertilizantes y bioplaguicidas para la transición agroecológica?

**Nathan Einbinder** Candidato a doctor, Agroecología y sociedad, El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas **Helda Morales** Investigadora titular, coordinadora del programa "Masificación de la agroecología para los sistemas alimentarios sustentables", El Colegio de la Frontera Sur, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas

**D**espués de décadas enfocados en incrementar la producción de granos y el desarrollo de insumos sintéticos, finalmente se reconoce que este enfoque trajo efectos negativos, entre ellos la contaminación del suelo y el agua, el abandono del campo, enfermedades como cáncer y diabetes, una alta dependencia en combustibles fósiles y aumento en los gases de invernadero.

La solución a estos problemas, como lo sugiere la FAO, es la transición a la agricultura sustentable. Esta ha sido practicada por numerosos grupos indígenas desde hace siglos. Sin embargo, no fue sino hasta inicios del siglo 20, que visionarios como Eve Balfour y Lord Northbourne comenzaron a popularizar el término por medio de su trabajo que confirma la importancia de la diversidad, el conocimiento ecológico y el valor de la agricultura familiar a pequeña escala. Las evidencias científicas sugieren que necesitamos urgentemente una reconstrucción total del sistema agroalimentario y en

varios países, incluyendo a México, se han iniciado planes para lo que se ha denominado la "transición agroecológica".

La agroecología incluye una serie de prácticas y principios ancestrales que incluyen el uso de variedades nativas, los cultivos intercalados, la agroforestería, la conservación de semillas, medidas de conservación de suelos, tal como la labranza cero o reducida; y la producción de abonos a partir de materiales locales.

Aunque es esperanzador ver esta ola de interés para transformar la forma en que cultivamos, la simplificada versión de la agroecología que se está promoviendo es preocupante. La transición agroecológica tiene como punta de lanza una mera "sustitución de insumos". Se promueve sustituir los fertilizantes y plaguicidas sintéticos por aquellos que son orgánicos.

No nos tomen a mal: nosotros apoyamos las acciones que motiven a cambiar de convencional a orgánico. Sin embargo, debemos distinguir las prácticas que son sustentables de las que solo tratan de dar respuestas rápidas y

pretenden ajustarse a todas las condiciones, tal como lo hicieron las tecnologías que nos llevaron al lío en el que estamos metidos.

Por más de una década hemos documentado la efectividad de las prácticas tradicionales de agricultores indígenas de Guatemala y documentado estrategias para la sustentabilidad. Como en otras áreas de Mesoamérica, las familias con las que trabajamos confrontan serios retos para mantener su herencia campesina. La sequía es cada vez más frecuente y severa; el contexto político económico es hostil, y las consecuencias de la violencia de los años 80, cuando aldeas enteras fueron arrasadas por el ejército y paramilitares, aun persisten.

Como una forma de mejorar la soberanía alimentaria y atender la restauración cultural y ambiental, muchas familias se han volcado o retornado a la agroecología. Por medio de la diversificación de cultivos, el rediseño y el uso sustentable de recursos locales, se han hecho más resilientes y menos dependientes en insumos externos. El sistema milpa, desarrollado en Mesoamérica hace miles de años, es una de las mejores estrategias para mantener la humedad del suelo, enfrentar el cambio climático y brindar una dieta sana.

Estas familias tienen que resistir programas nacionales e internacionales que regalan agroquímicos y semillas híbridas, que a pesar de aumentar los rendimientos en los primeros años, no pueden ser guardadas y según los productores no resisten la sequía. La lógica detrás de esos programas, además de apoyar una industria multimillonaria, es proveer soluciones rápidas a problemas relacionados con la falta de nutrientes en el suelo, así como reducir los costos de mano de obra. La sustitución por bioinsumos orgánicos podría minimi-

zar los daños asociados al uso de agroquímicos sintéticos. Entonces, ¿qué hace a esos bioinsumos tan incompatibles con los sistemas agrícolas sostenibles?

Para comenzar, como lo sugiere el experto en sustentabilidad Jules Pretty, el fundamento de cualquier sistema agrícola sostenible es el uso efectivo e ingenioso de los recursos locales por parte de pequeños agricultores locales. Para que esto ocurra se necesita un fuerte capital social, un íntimo conocimiento de la ecología del lugar e innovación continua. Los problemas con la introducción de "bioinsumos" en las comunidades es el desplazamiento de las prácticas locales y el riesgo de crear nuevas formas de dependencia. Tal como la introducción de agroquímicos provocaron disturbios en los procesos agroecológicos locales hace 40 años, los equivalentes orgánicos continúan este ciclo, desplazando los saberes locales sobre cómo mantener la fertilidad del suelo por medio del cuidadoso manejo de la materia orgánica, sobre cómo evitar las plagas por medio de los policultivos y el conocimiento de los tipos de suelo y microclimas, que entre las familias con las que trabajamos, involucran una profunda conexión con el territorio y su gobernanza.

Además hay cierta evidencia de que los bioinsumos podrían afectar a los microorganismos nativos del suelo y a los insectos benéficos. Los biofertilizantes producidos en un laboratorio podrían ser de utilidad en una región donde el uso intenso de agroquímicos ha eliminado la vida en el suelo, pero podría eliminar a las bacterias y hongos que las prácticas tradicionales han logrado mantener vivos para darnos cultivos ricos y nutritivos. Algunos bioplaguicidas son muy específicos y atacan únicamente a una plaga, pero la mayoría también afectan a polinizadores como las abejas, y a catarinas y avispa que controlan a las plagas.

Si la sustentabilidad es el verdadero objetivo, necesitamos enfocarnos no en nuevas soluciones tecnológicas que consideren al territorio y a las familias productoras como homogéneas, sino en la recuperación de prácticas agroecológicas locales que el tiempo ha comprobado efectivas. Necesitamos reconocer a aquellos que mantienen los saberes tradicionales, apoyar a los grupos comunitarios, e introducir nuevas técnicas solo cuando sean fácilmente apropiables, en armonía con el entorno natural y cultural, y cuando se haya considerado su impacto desde una visión ecológica.

Solo cuando esto ocurra veremos cambios para una agricultura y un sistema alimentario verdaderamente justos. •

**Si la sustentabilidad es el verdadero objetivo, necesitamos enfocarnos no en nuevas soluciones tecnológicas que consideran al territorio y a las familias productoras como homogéneas, sino en la recuperación de prácticas agroecológicas locales que el tiempo ha comprobado efectivas.**